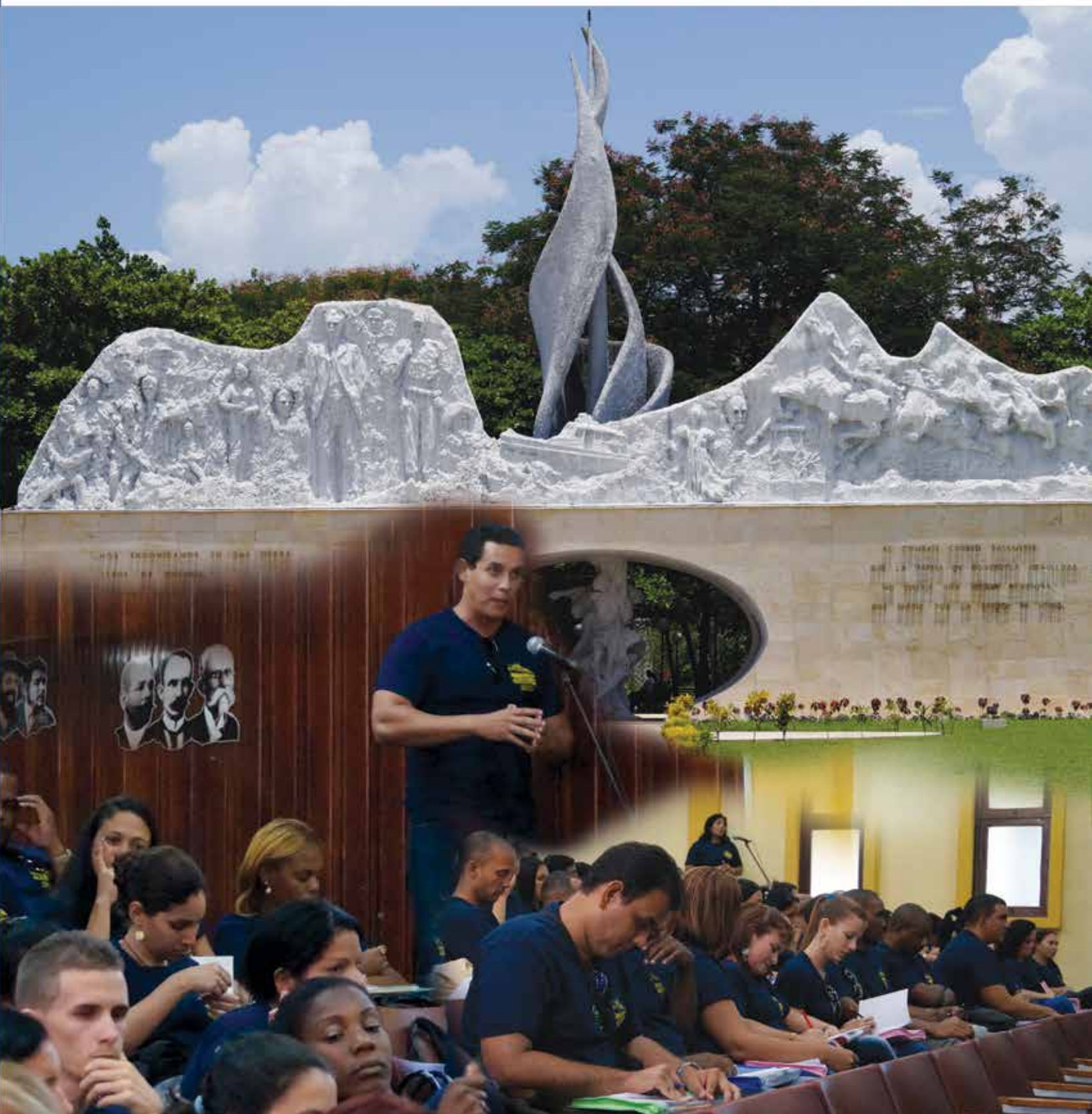




# LEGALIDAD DERECHO Y SOCIEDAD

No. 2 / 2015







**LÍNEA ÚNICA**  
**DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**080212345**

**Puede contactarnos en todas  
las provincias y municipios del país**

# LEGALIDAD DERECHO Y SOCIEDAD

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA

NO 2, agosto de 2015

## DIRECTOR EJECUTIVO

Msc. Marlén Fernández Machado

## CONSEJO DE REDACCIÓN

Msc. Yamila Peña Ojeda

Lic. Dixán Fuentes Guzmán

Msc. Fernando Rodríguez Infante

Msc. Osmín Álvarez Bencomo

Msc. Caridad Sabó Herrera

Lic. Miguel Ángel García Alzugaray

## EDICIÓN Y CORRECCIÓN

Lic. Yanisel Bernal Almira

Lic. Jessica Rivero Rodríguez

MSc. Addis L. Avila Sterling

## DISEÑO GRÁFICO

María Elena Gil Mc Beath

## IMPRESIÓN

Agencia de comunicación Publicitur

## REDACCIÓN

Ave 1ra # 1801 e/ 18 y 20. Reparto Miramar, Municipio Playa, La Habana. CP 11300

**TELÉFONO:** (537) 206 1037

**E-MAIL:** caridadsabo@fgr.cu, dcinstitucional@fgr.cu

**RNPS:** 2413

La Revista Legalidad, Derecho y Sociedad constituye la publicación oficial de la Fiscalía General de la República de Cuba, emitida con una frecuencia cuatrimestral, como continuidad de la Revista Legalidad Socialista. Es un espacio donde se presentan artículos y ponencias, cuyos autores están fundamentalmente vinculados al sector jurídico, así como noticias y secciones con informaciones actualizadas de interés social.

El Consejo de Redacción posee la potestad para realizar cambios relacionados con la estructura, extensión, redacción y estilo de los trabajos, en función de elevar la calidad de los contenidos a publicar.

Los interesados pueden enviar sus trabajos, opiniones y sugerencias a la Redacción de la revista.

# SUMARIO

## NOTA AL LECTOR

**PÁG. 3**

## NOTICIAS

**PÁG. 4**

## PONENCIAS

Enfoque preventivo del sistema penal cubano

**PÁG. 24**

Ejecución penal en Cuba

**PÁG. 33**

Valoración crítica de la regulación de la legítima defensa en el código penal

**PÁG. 46**

La convicción, un arma imprescindible en la protección de niñas y niños víctimas

**PÁG. 52**

La alta incidencia del delito de lesiones en la provincia deiego de ávila

**PÁG. 59**

## CONVOCATORIA

**PÁG. 64**

## LOS FISCALES RESPONDEN

**PÁG. 66**

## SABÍAS QUE

**PÁG. 68**

## EFEMÉRIDES

**PÁG. 70**

## GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS

**PÁG. 72**



## NOTA AL LECTOR

Con el presente número continuamos la edición periódica de la Revista “Legalidad, Derecho y Sociedad”, órgano oficial de prensa de la Fiscalía General de la República de Cuba.

Esta publicación tiene entre sus objetivos contribuir a elevar la conciencia jurídica ciudadana, mediante la exposición de materiales informativos y de carácter científico – técnico, que sustentan, desde criterios autorizados, las acciones contra el delito y la protección de los derechos ciudadanos. Igualmente, favorece el cumplimiento de la legalidad y estimula la labor de los profesionales del Derecho, en momentos trascendentales de la actualización del modelo económico cubano, lo que exige el óptimo esfuerzo y desempeño del sector jurídico.

En esta edición los invitamos a participar en el XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y el Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad que tendrá lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana, del 23 al 25 de marzo de 2016.

Además, en este número podrán estar al día de diversas temáticas del quehacer jurídico a través de noticias, ponencias y artículos, los que abordan la práctica judicial desde diversos enfoques y la labor cotidiana de la Fiscalía.

Desde este espacio, extendemos una cordial invitación para reflexionar sobre las principales problemáticas que hoy afectan a nuestra sociedad y el papel que nos corresponde desempeñar, para garantizar cada día una justicia ágil, oportuna y de calidad, además de exhortarlos a cooperar en este loable empeño, enviando sus artículos, monografías, ponencias y demás trabajos a nuestra Redacción.

Fraternalmente,

DARÍO DELGADO CURA  
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



# LA COMUNICACIÓN ES UN RECURSO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO

POR. JESSICA RIVERO RODRÍGUEZ  
Periodista. Fiscalía General de la República

La Reunión Nacional de Comunicación Institucional de la Fiscalía General de la República se efectuó el 30 de abril, a través de videoconferencia con todas las provincias del país. En la misma, se analizó el impacto, deficiencias y principales retos de esta esfera en el Órgano.

Como parte del encuentro se desarrolló el Panel “Pautas generales para el trabajo de Comunicación Institucional en los momentos actuales. Rol que deben jugar los organismos en la elaboración e implementación de sus estrategias de comunicación”, en el cual intervinieron el Dr. Raúl Garcés Corra, Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Humberto Fabián Suárez, Vicepresidente de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACSS) y Rosa Miriam Elizalde Zorrilla, miembro de la Presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba.

El Vicepresidente de la ACSS manifestó que la comunicación institucional se ha erigido como un problema de seguridad nacional, por la importancia que tiene en el contexto actual, y reconoció el gran avance que ha tenido la Fiscalía General en esta área.

También señaló que la gran deuda de la comunicación en Cuba es que los órganos y entidades no informan a sus propios trabajadores sobre los planes y estrategias, por lo que la

comunicación interna es fundamental. Opinó acerca de la necesidad de un marco legal que regule la comunicación en el país y un Órgano que lo represente.

Por su parte, el Dr. Raúl Garcés expresó que las ciencias sociales deben estar en función de dar solución a problemas concretos y que la comunicación es un recurso estratégico de desarrollo, por lo tanto, en esta sociedad donde no hay estructura jerárquica al transmitir informaciones, es necesario un enfoque estratégico de comunicación.

Rosa Miriam Elizalde, también periodista de Cubadebate, se refirió a los nuevos escenarios en los que se enmarca la comunicación y la importancia que tienen las redes sociales y otros espacios alternativos a los medios de comunicación tradicionales, los cuales tienen mayor impacto, especialmente en las nuevas generaciones.

Luego de este panel, la Fiscal Jefa del Departamento de Comunicación Institucional de la Fiscalía General, Caridad Sabó Herrera, analizó la gestión de comunicación que realiza el Órgano, y posteriormente, las provincias de Guantánamo, Artemisa, Sancti Spíritus, Villa Clara y La Habana brindaron sus experiencias acerca de la labor que desarrollan en cada uno de sus territorios.

# REUNIÓN NACIONAL DE PROCESOS PENALES

**L**a Fiscalía General de la República realizó, los días 26 y 27 de mayo, la Reunión Nacional de la especialidad de Procesos Penales. La misma, contó con la presencia de los fiscales jefes de direcciones y departamentos de este Órgano, encabezados por el Fiscal General de la República, Darío Delgado Cura.

Este encuentro se efectuó a través de videoconferencia con todas las provincias del país, donde participaron más de 700 compañeros, entre fiscales, instructores, especialistas del laboratorio de criminalística y policías.

La primera jornada tuvo como invitado especial al Héroe de la República Gerardo Hernández Nordelo y los compañeros Homero Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado; Joaquín Bernal Rodríguez, funcionario del Comité Central del Partido y Alina Vicente Gainza, Vicecontralora General de la República.

En este espacio se evaluaron los resultados de trabajo de la Fiscalía General en el enfrentamiento a las indisciplinas sociales, las ilegalidades, los hechos asociados a la corrupción, la necesidad de incrementar la calidad y celeridad en la tramitación de los procesos penales, y el papel del fiscal en el acto del juicio oral. Al respecto, se enfatizó en la objetividad, racionalidad y sensibilidad que debe caracterizar la labor del fiscal en esta actividad, lo que contribuye a la prevención y educación jurídica de los ciudadanos.

Otra de las temáticas abordadas fue la problemática de las drogas, la que constituye una prioridad para Cuba y este Órgano del Estado. Referente a ello, se debatió sobre la necesidad de adoptar medidas para prevenir estas conductas y enfrentarlas con la severidad requerida.

Sobre esta cuestión, Gerardo Hernández señaló la necesidad de hacer un mayor uso de los mecanismos de comunicación institucional en función de la prevención, creando espacios en los que se transmitan la problemática y sus consecuencias, enfocado fundamentalmente en el sector juvenil.

En la segunda jornada de esta reunión se evaluó el enfrentamiento que realiza la Fiscalía General al lavado de activos y la evasión fiscal, entre otros ilícitos, que requieren ser afrontados con severidad, tanto en lo administrativo como en lo penal.

Con respecto al lavado de activos, Cuba es signataria de la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, firmada el 7 de abril de 1989 y ratificada el 12 de junio de 1999. También, rubricó el 13 de diciembre de 2000 y ratificó el 9 de febrero de 2007 la Convención de Palermo sobre la Delincuencia Transnacional Organizada. Acerca de la corrupción, es firmante de la Convención contra este fenómeno, el 9 de diciembre de 2005, que fue ratificada el 23 de febrero de 2009.



# JORNADAS CIENTÍFICAS en la Fiscalía General



La Fiscalía General de la República realizó durante el mes de junio de 2015 los Eventos Científicos Territoriales, los cuales contribuyeron a fomentar la preparación de los trabajadores del Órgano.

El 12 de junio se realizó la jornada correspondiente a la región de oriente, que tuvo como sede la provincia de Guantánamo. En la misma, se debatieron 15 trabajos, sesionando por paneles. Entre ellos, el relacionado con “La informática, un reto para la Fiscalía”, donde se abordaron temas novedosos derivados del uso de las tecnologías, desde diversas aristas. También se discutieron otros vinculados con la temática penal, la protección a los menores y el enfrentamiento a los delitos.

Como parte de este encuentro, la Fiscal Jefa de la Provincia de Guantánamo, Joaquina Naranjo Gómez, impartió una conferencia sobre Evasión Fiscal, tema de gran actualidad en nuestros días y que constituye un reto para la Fiscalía.

En el Instituto Nacional de Ciencias Agrarias, en la provincia de Mayabeque, el 19 de

junio se realizó la jornada en Occidente. El programa incluyó 29 ponencias, relacionadas con las materias de penal, civil, y dirección y preparación, donde se vinculan los procesos penales, el enfrentamiento a la corrupción, los delitos y las ilegalidades, la seguridad informática, la comunicación institucional, la gestión documental, entre otros temas.

Participaron fiscales, informáticos, comunicadores, psicólogos, periodistas y otros especialistas de las fiscalías provinciales de La Habana, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Isla de la Juventud, Pinar del Río y del Órgano Central, así como estudiantes de Derecho y profesores vinculados con esta rama del saber.

La jornada inició con la Conferencia “Importancia de los delitos transnacionales por nuestras fronteras y su afectación en las operaciones transnacionales”, impartida por especialistas del Ministerio del Interior. En esta se refirieron al enfrentamiento que realizan las autoridades cubanas a las drogas, los delitos financieros, el lavado de activos, la

falsificación de documentos con fines migratorios, la trata de personas, la explotación infantil, el contrabando y otros delitos.

Para concluir, el Dr. Ercilio Vento Canosa, profesor titular de la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas, ofreció la Conferencia Magistral “A propósito de la Muerte de José Martí”, en la que abordó el deceso de nuestro Apóstol, presentando datos de gran interés sobre las condiciones en que ocurrió y la etapa posterior a este.

Mientras, en las provincias de Camagüey y Sancti Spíritus se realizaron las jornadas de la región central, el día 25 de junio. En estas se presentaron 28 ponencias de especialistas de Camagüey, Las Tunas, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara y Cienfuegos, que abordaron diversas temáticas vinculadas a la labor de la Fiscalía General.

Las ponencias que resultaron premiadas en estas jornadas científicas serán presentadas en el II Evento Científico Nacional, a sesionar en el próximo mes de octubre.



## FISCALÍA GENERAL realiza Taller sobre el Sistema de Gestión Fiscal (SIGEF) y el Sistema de Gestión Estadística (SIGE)

En la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), la Fiscalía General de la República desarrolló el Taller SIGE- SIGEF este 23 de mayo. En el mismo, se debatió sobre el uso y explotación del Sistema de Gestión Fiscal (SIGEF) y el Sistema de Gestión Estadística (SIGE), así como de los problemas tecnológicos que presentan estas aplicaciones, de acuerdo a las especialidades de trabajo del Órgano.

En este encuentro participaron fiscales jefes de direcciones y departamentos, fiscales jefes provinciales y otros especialistas y miembros del Consejo de Dirección de la Fiscalía, encabezados por Darío Delgado Cura, Fiscal General. También asistió Miriam Nicado García, Rectora de la UCI y otros profesionales de este centro de estudios.

El SIGE y SIGEF son aplicaciones desarrolladas por la UCI, que forman parte de la Estra-



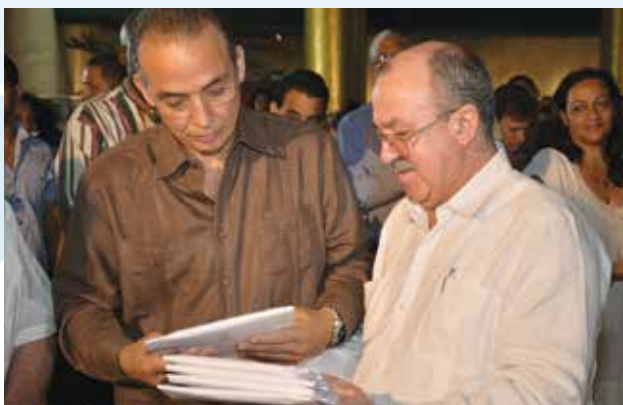
Foto: Adrian Lago del Valle

tegia de Informatización implementada por la Fiscalía, con el objetivo de perfeccionar la labor de esta Institución. La primera fue desplegada en octubre de 2013, mientras el Sistema de Gestión Fiscal (SIGEF) se puso en funcionamiento en diciembre de 2014.

## Fiscalía General conmemora DÍA DEL TRABAJADOR JURÍDICO

El Día del Trabajador Jurídico fue conmemorado por la Fiscalía General de la República este 8 de junio en el Memorial José Martí. Durante la jornada, el prologuista Rolando Rodríguez, profesor titular de Historia de Cuba, presentó el libro Aproximación a la historia de la Fiscalía General de la República, elaborado por un colectivo de investigadores y fiscales que pertenecieron y pertenecen a esta institución.

Esta obra constituye un acercamiento a los antecedentes y a la historia de este Órgano y es el resultado de una rigurosa investigación histórico-jurídica realizada por un colectivo de autores de la institución. Sus páginas contienen un recuento de los momentos más importantes desde su fundación, la evolución de su



estructura y funciones, y sus proyecciones en el contexto actual.

El Fiscal General de la República, Darío Delgado Cura, entregó a Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, cuatro ejemplares

destinados al Comandante en Jefe Fidel Castro, al General de Ejército Raúl Castro, a José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido y a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. A nuestros Cinco Héroes también les fueron obsequiados los libros, Antonio Guerrero, presente en el acto, los recibió en nombre de todos.

Por sus méritos y alto sentido de pertenencia a la institución, se reconocieron a diez trabajadores con la medalla Jesús Menéndez. En

representación de los condecorados, el fiscal Enrique Núñez Grillo recordó las proezas del Mayor Ignacio Agramonte, figura ilustre de la historia Patria y para los juristas cubanos.

Además, trabajadores de nuevo ingreso firmaron el Código de Ética de la Fiscalía, con lo que fijaron su compromiso con esta institución. De igual forma, Antonio Guerrero dejó inaugurada una exposición permanente de cinco acuarelas, donde evoca la historia que él y sus cuatro hermanos de lucha vivieron, y recordó la importancia que tienen los juristas.

## MÁS CERCA DE LA JUVENTUD

### Se reúne Fiscal General con fiscales jóvenes de las regiones de Occidente, Centro y Oriente

Como parte del intenso trabajo que desarrolla la Fiscalía General de la República con el sector juvenil, el Fiscal General, Darío Delgado Cura, se reunió los días 29 de abril, 28 de mayo y 17 de junio con los fiscales jóvenes, de hasta 35 años de edad, de las regiones de Occidente, Centro y Oriente.

Dichas reuniones responden al trabajo político- ideológico

que se realiza con las jóvenes generaciones y a la Estrategia de Comunicación del Órgano para el fortalecimiento de la comunicación con el público interno.

En sus intervenciones, los jóvenes de las tres regiones agradecieron a la dirección de la Fiscalía General por propiciar estos encuentros, pues resultan muy novedo-

sos y constituyen espacios propicios para expresar sus preocupaciones, ganar en el protagonismo de la juventud y como preparación política-ideológica. Además, en estas reuniones los jóvenes tienen la oportunidad de intercambiar experiencias sobre la labor que realiza la Fiscalía y los retos que tiene la juventud en el contexto actual.

## EL RELEVO SEGURO DE LA REVOLUCIÓN



Pinar del Río



Mayabeque



La Habana







Matanzas



Artemisa

Municipio Especial  
Isla de la Juventud

La Segunda Reunión del Fiscal General de la República con jóvenes fiscales de la región de Occidente se realizó el 29 de abril de 2015, en el Teatro de la Universidad Agraria de Mayabeque.

En este encuentro participó el Consejo de Dirección de la Fiscalía General de la República, encabezado por Darío Delgado Cura,

Fiscal General, autoridades de la provincia sede y como invitado especial, el Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo. Los presentes agradecieron la participación de este luchador antiterrorista y se identificaron rápidamente con la historia que lo antecede y su condición de joven revolucionario.



Gerardo valoró como importante la labor que realiza la Fiscalía General en el enfrentamiento a los delitos, la corrupción y las ilegalidades y en el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, un logro imprescindible de la Revolución cubana. Reconoció en los

jóvenes presentes el relevo seguro de la Revolución, además, respondió preguntas relacionadas con el proceso judicial que se les realizó injustamente en Estados Unidos a los Cinco luchadores.



## LOS JÓVENES UN PASO ADELANTE



El Fiscal General de la República se reunió con jóvenes trabajadores de este Órgano, pertenecientes a la región del Centro, el 28 de mayo, en el Salón del Gobierno Provincial de Cienfuegos.

Al encuentro, en el que participaron 139 jóvenes, asistió el Consejo de Dirección de la Fiscalía Provincial de Cienfuegos, así como autoridades del Partido de la provincia, de la Asamblea Provincial del Poder Popular, de la Unión

de Jóvenes Comunistas y otras organizaciones.

Los participantes en esta reunión colocaron una ofrenda floral a José Martí e intercambiaron con directivos de la Oficina del Conservador de la Ciudad, un sitio de alto valor cultural de este territorio.

Por su parte, los organizadores entregaron un reconocimiento a Yhinarat Estenoz Bernal, de Sancti Spíritus, por ser la fiscal más joven del encuentro; y a otros que también son los más jóvenes en ocupar cargos de dirección, en este caso a Yaritza Yoran Marrero, de Ciego de Ávila, como Fiscal Jefa Municipal; a Yurina Pérez Azconegui, de Cienfuegos, quien es Vicefiscal Municipal y Fernando García Bones, de Ciego de Ávila como Jefe de Departamento.

## ¡DIGA QUÉ MÁS PODEMOS HACER!



El 17 de junio, el Fiscal General de la República se reunió con fiscales jóvenes de la región Oriental. En este encuentro, que tuvo lugar en Bayamo, provincia Granma, participaron 275 jóvenes. Entre los presentes estuvieron 12 estudiantes del Diplomado de Dirección para Fiscales Jefes Municipales, que realiza esta institución.

Osmín Álvarez Bencomo, Fiscal Jefe de Capacitación de la Fiscalía General, presentó un resumen de las respuestas a los principales planteamientos que se realizaron en el encuentro que le antecedió, asociados a la superación técnico-profesional y condiciones de trabajo.

Entre los puntos de debate estuvo la necesidad de dotar a los trabajadores de habilidades

comunicativas y de herramientas de la psicología, para perfeccionar su trabajo, principalmente para aquellos que atienden a los ciudadanos. De igual forma, destacaron la importancia de desarrollar conocimientos informáticos, teniendo en cuenta las redes y sistemas que se están poniendo en práctica en el Órgano. Además, realizaron sugerencias para mejorar la formación de los recién graduados.

Se evidenció un alto nivel de pertenencia y compromiso con la institución por parte de los jóvenes. Un fiscal de Las Tunas expresó que “la juventud de la fiscalía cuenta con los valores éticos para marchar hacia delante, lista para responder ante los cambios que se presenten. Juventud que considera que su misión es ve-

lar por la historia, la legalidad y la Revolución”. Mientras, un joven de Camagüey culminó su intervención refiriendo que el ser fiscal va por encima de toda motivación material, él trabaja porque ama ser fiscal, no importan las condiciones.

Fue este un espacio propicio para que los asistentes conocieran sobre las tradiciones y lugares de relevancia de la provincia sede, pues este resulta un lugar de alto valor histórico, patriótico y cultural para el país.

En la reunión participaron, además, fiscales jefes de las provincias orientales, Sonia Virgen Pérez Mojena, Primera Secretaria del Partido en Granma y autoridades de la Asamblea Provincial del Poder Popular.



## Encuentro del Fiscal General con estudiantes de Derecho de la Universidad de Mayabeque

El Fiscal General de la República, Darío Delgado Cura, sostuvo este 23 de junio un encuentro con estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Agraria de la Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”, ubicada en la provincia Mayabeque.

La estructura, misión, visión, funciones y responsabilidades de la Fiscalía en el proceso de las transformaciones económicas y sociales que tienen lugar en el país, el en-

frentamiento a la corrupción, la droga, las indisciplinas sociales y otros delitos, fueron algunos de los temas abordados. Además, durante el diálogo con los 120 jóvenes de esta especialidad, el Fiscal General transmitió algunos casos de interés para el país a partir del enfrentamiento al delito y la corrupción.

Los estudiantes y profesores calificaron de muy positivo el encuentro, pues contribuye a la formación vocacional y

la preparación de las nuevas generaciones, y despierta en ellos el interés y motivación por el trabajo de la Fiscalía.

En el encuentro participaron la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, profesores, representantes de la FEU y estudiantes de la carrera, así como una representación del Consejo de Dirección de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Provincial.

# FISCALÍA GENERAL RECIBE PREMIO **ESPACIO 2015**

Este 25 de junio, la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) entregó el Premio Espacio 2015, en las categorías Comunicación Institucional, Creatividad, Relaciones Públicas y por la Obra de la Vida, en el acto de celebración por su 24 aniversario.

Este galardón, máximo que confiere la ACCS, es entregado a profesionales, instituciones, organizaciones y entidades cubanas que se han destacado en la esfera de comunicación social. Surge con el objetivo de estimular el desarrollo profesional, reconocer la labor de sus afiliados y profesionales en el ejercicio de la comunicación en beneficio de la sociedad.

En la ceremonia, realizada en la sala Cetro del Hotel Meliá Cohiba, fue laureada la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Justicia en la categoría Comunicación Institucional, por los avances y la comprensión de sus dirigentes en la instrumentación de los sistemas de comunicación y la creación de estructuras para este propósito. También obtuvieron el reconocimiento en



este apartado a las instituciones que han desarrollado sus estrategias de comunicación. Entre ellas se encuentran el Centro de Información y Asesoría Jurídica, la Oficina de Diseño (ONDI), el Centro de Estudios Superiores de Derecho (CESD), el Instituto de Estadística (ISDI), así como el abogado Alejandro Cordero Morell.

En la categoría de Creatividad, recibieron el Premio los señadores Alejandro Rodríguez, Fernando Miranda y Aracelis. Mientras que en la categoría Bormey, el Premio "de en casa" (volumen 2), Miguel Mariela Duque formaron parte los abogados y profesionales en Relaciones

Asimismo, la asociación de comunicadores reconoció por la Obra de la Vida a aquellas personalidades cubanas que han realizado aportes trascendentes a la comunicación social.



## Concluye Diplomado en Dirección

Con la graduación de 24 fiscales, culminó el 3 de julio la III Edición del Diplomado en Dirección para fiscales jefes municipales del centro y oriente, que tuvo su sede en las provincias de Villa Clara y Santiago de Cuba, respectivamente. Este curso, que comenzó el 20 de abril, forma parte del programa de superación de cuadros que instituyó la Fiscalía General de la República. El mismo,

propició en sus participantes la adquisición de conocimientos y el perfeccionamiento de habilidades directivas.

La conclusión del diplomado en la región oriental se realizó en el Museo de la lucha clandestina de esta heroica ciudad, al cual asistió el Vicefiscal General Carlos Concepción Rangel, los fiscales jefes de estas provincias, autoridades del territorio y profesores de la

Universidad de Oriente, a los que se les reconoció por su entrega a este proyecto. Previo al acto, se depositó una ofrenda floral en la tarja de homenaje a los sucesos del 30 de noviembre de 1956. En la jornada fue seleccionada como alumna integral Nereyda Figueredo Ricardo, Fiscal Jefa Municipal de Banes, provincia Holguín.

## Fiscalías de NICARAGUA y CUBA firman acuerdo



Ana Julia Guido Ochoa, Fiscal General de Nicaragua y Darío Delgado Cura, Fiscal General de Cuba rubricaron un Acuerdo de Cooperación Bilateral entre la Fiscalía General de Cuba y el Ministerio Público de Nicaragua, el 30 de julio de 2015.

Este convenio tiene como objetivo fortalecer los nexos existentes entre ambas naciones e impulsar y ampliar las relaciones entre estos Órganos, para contribuir a la superación técnica y profesional en diferentes esferas de su actividad, propiciar el intercambio de experiencias y desarrollar acciones en la prevención y la lucha contra el delito.

Participaron como invitados en la firma el Señor Luis Cabrera González, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Nicaragua en Cuba y Homero Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado.

Le precedió un encuentro entre la delegación nicaragüense y el Consejo de Dirección de la Fiscalía General, donde ambas partes manifestaron la amistad que une históricamente a estos pueblos hermanos y los intereses que tienen para que prevalezca la justicia.

La Dra. Guido Ochoa expresó que “apartarse de Cuba significa no ser revolucionarios” y que este acuerdo contribuye a la lucha contra el delito transnacional, el lavado de activos y la corrupción, pues ambas naciones tienen propósitos comunes en múltiples esferas para lograr la justicia. Manifestó que son ahora las leyes las armas con las que cuentan, y a propósito, citó la frase de nuestro Comandante Fidel Castro: “batallas de ideas valen más que trincheras de piedras”. Además, refirió que aplaude la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y conoce los retos que esto supone, así como las ventajas que puede traer para ambos pueblos.

Por su parte, el Fiscal General cubano ratificó que el convenio ayudará a fortalecer el sistema de justicia para lograr que cada vez sea más pronta y de mayor calidad.

En horas de la tarde la representación de este país visitó el Memorial José Martí en la Plaza de la Revolución, donde colocó una ofrenda floral. También, sostuvieron un encuentro con Homero Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado.

# PARA AFIANZAR LA COOPERACIÓN

## Delegación de la Fiscalía General realiza visita oficial a varios países

**L**a Fiscalía General de la República tiene firmado programas de colaboración y acuerdos bilaterales con 9 países, en varias aristas. Para dar cumplimiento a los programas complementarios, delegaciones de este Órgano realizaron visitas oficiales a disímiles naciones.

También como resultado de la colaboración con estados de todo el orbe especialistas de la Fiscalía General han asistido a seminarios, cursos y talleres, sobre temáticas relacionadas con la trata de personas, la capacitación, protección a la niñez, el enfrentamiento a la corrupción, los delitos y otras manifestaciones.

### ENCUENTRO CON FISCALÍA DE BELARÚS

Una delegación de la Fiscalía General de la República realizó visita oficial a la República de Belarús, entre el 25 y el 31 de mayo, la cual tuvo como objetivo dar cumplimiento a las primeras actividades previstas para el año 2015 del programa de cooperación que ma-

terializa el acuerdo bilateral firmado, en septiembre de 2013, entre las fiscalías de Cuba y Belarús.

La parte cubana estuvo encabezada por Marlén Fernández Machado, Vicefiscal General e integrada por Elda Barreiro Faraldo, Fiscal Jefa Provincial de Hol-

guín, Luis Alberto Hernández Martínez y Mariela Brito Blanco, fiscales de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades del Órgano Central. Los mismos, fueron recibidos por los vicefiscales generales A.K Stuk y Lashin Alexander Mijailovich, de la

Fiscalía de esta nación europea, y otros compañeros del consejo de dirección.

En este encuentro se intercambiaron experiencias sobre el enfrentamiento a la corrupción administrativa, para lo que se desarrolló un seminario que contó con la dirección del



Vicefiscal General Mijailovich, Jefe de la Dirección para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y contó con la presencia de otros fiscales de diferentes direcciones vinculados al tema y de un profesor de la cátedra de Derecho Penal de la Academia del Ministerio del Interior.

En este panel se debatió sobre la actividad de las Fiscalías de Cuba y Belarús en materia de lucha anticorrupción y otros temas relacionados con el enfrentamiento a este fenómeno, como la persecución penal, medidas adoptadas para su prevención, la imposición de sanciones severas a los responsables, la recuperación de activos, las vulnerabilidades en determinados sectores y el papel que desempeñan la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Comité de Investigaciones en este combate.

Además, se abordó el cuarto programa para el enfrentamiento a la corrupción en Belarús, la actualización de la Ley anticorrupción y el incremento de la se-

veridad en las leyes penales. De igual modo, fue analizada la creación del Comité de Investigaciones, que integran especialistas de los organismos jurídicos del país, este posibilita aumentar la efectividad en la lucha contra la corrupción.

La Vicefiscal General Marlén Fernández Machado expresó que fueron recibidos con todo el amor y consideración que los belarusos sienten por Cuba y especialmente por los compañeros de la Fiscalía, y que estos recuerdan con satisfacción su visita a este país.

Como parte del programa, la delegación cubana intercambió con fiscales recién egresados que realizan la preparación en este campo. Además, visitó la biblioteca nacional de esta nación y la escuela José Martí, donde se combina la enseñanza general con la especial para débiles auditivos de diferentes niveles. La Vicefiscal General de la Fiscalía General señaló que en este centro se profesa un gran amor por Cuba y por el Apóstol.

## SEGUNDO CURSO DE DIRECCIÓN EN RUSIA



La segunda edición del curso de recalificación para cuadros de dirección se realizó desde el 1ro de junio hasta el día 20 de julio en Rusia, para lo cual viajó a este país una delegación de la Fiscalía General de la República.

El mismo, tuvo su sede en el Instituto de Moscú, perteneciente a la Academia de la Fiscalía General de la Federación de Rusia, y participaron fiscales jefes de direcciones del Órgano Central, fiscales jefes provinciales y otros cuadros de dirección.

Esta edición tuvo entre sus objetivos fortalecer las relaciones existentes entre la República de Cuba y la Federación de Rusia y consolidar los nexos de cooperación entre las fiscalías generales de ambas naciones, a partir del Acuerdo de Cooperación firmado entre estos órganos en octubre de 2011 y sus programas de actividades.

De igual forma, resultó un espacio propicio para la promoción del XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y el Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, a celebrarse en marzo de 2016 en el Palacio de Convenciones de La Habana.

**XIII**  
**Encuentro Interna-**  
**cional Ciencias Penales**  
**2016 y el Primer Evento Lega-**  
**lidad, Derecho y Sociedad, se**  
**celebrará en marzo de 2016 en**  
**el Palacio de Convenciones**  
**de La Habana**



**E**n el  
centro  
conten  
Li, F  
nales  
de C  
Est  
cial  
gani  
por  
riore

## TALLER



**C**uba  
“Co  
Estados  
tuvo su a  
en Wash  
York.

La del  
grada po  
tamento  
General  
González  
Nacional  
oportuna  
República  
guay y V

Entre :  
visó cómo  
nas y los  
las polít  
Además  
la policía



## INTERCAMBIO ENTRE FISCALÍAS DE CUBA Y BRASIL



Entre el 20 y el 27 de junio, una delegación de la Fiscalía General de la República realizó visita oficial a Brasil, como parte de los convenios existentes entre las fiscalías de ambas naciones. La misma, tuvo como objetivo el intercambio de experiencias sobre disímiles temas relacionados con la labor de estos Órganos.

La parte cubana estuvo encabezada por Carlos Concepción Rangel, Vicefiscal General e integrada por Pedro Pablo Cutiño Dieguez, Fiscal Jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Illegalidades, Nerly Espinosa Rivero, fiscal de la Dirección de Procesos Penales, María de los Ángeles Boudet Fernández, fiscal de la Dirección de Cooperación Jurídica y Relaciones Internacionales y Yosbel Vázquez Morales, especialista de la Dirección de Informática y Comunicaciones.

Esta visita responde al Programa de Cooperación Bilateral 2014-2015, firmado el 18 de

julio de 2013 entre la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República Federativa del Brasil (PGR), que materializa el Memorando de Entendimiento entre ambas instituciones.

El programa comprendió un panel donde se debatió respecto a la actividad de las fiscalías cubanas y brasileñas en la lucha anticorrupción, incluyendo las cuestiones de la prestación de asistencia judicial en materia penal y las relativas a embargar, confiscar y reintegrar los bienes resultados de la corrupción.

Además, se analizaron y discutieron temas actuales relacionados con el enfrentamiento a la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, tráfico de drogas, migrantes y la trata de personas y de órganos, fortaleciendo la cooperación en este ámbito.

De igual forma, se abordaron aspectos vinculados con la informática, con el propó-

sito de incorporar actividades de cooperación relacionadas con el tema y preparar en este campo a los especialistas de ambas instituciones. La incorporación de esta temática es resultado de la visita del Fiscal General a Brasil, el pasado septiembre, y los encuentros sostenidos con la secretaria de la PGR.

La delegación de la Fiscalía General realizó, además, una actividad conjunta con el equipo de la Oficina de Combate a la corrupción de Mozambique, los cuales participaron en el evento internacional Ciencias Paneles 2014, que convoca el Órgano cubano. Por la parte mozambicana participaron Elias Manhica, magistrado del Gabinete Central de Combate a la Corrupción, y Francisco Bauque, Lino Mathe y Atija Cassamo, magistrados de los gabinetes provinciales de Combate a la Corrupción en las regiones de Nampula, Sofala e Inhambane, respectivamente.

# "SUBIR MONTAÑAS HERMANA HOMBRES"

El 89 cumpleaños de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el pasado 13 de agosto, supuso un gran regocijo para el pueblo cubano. A esta conmemoración y felicitación se unió la Fiscalía General de la República, cuyos trabajadores realizaron múltiples actividades.

En esa mañana se realizó un cumpleaños colectivo, donde participaron los hijos y familiares de los trabajadores del Órgano Central, en el que el gran homenajeado fue el invicto líder de la Revolución Cubana.

También en saludo a esta fecha y al día Internacional de la Juventud, 55 jóvenes pertenecientes a las fiscalías provinciales de Cienfuegos, Sancti

Spíritus, Villa Clara y Ciego de Ávila, escalaron en horas de la mañana del día 13, el **Caballote de Casa**, ubicado en la zona del Escambray, en Sancti Spíritus. En este lugar radicó la Comandancia del Che, cuando se encontraba al frente de la columna No. 2 durante las luchas del Ejército Rebelde por lograr el triunfo de nuestra Revolución.

Esta actividad demostró el sentido patriótico, el espíritu de combate y compromiso de nuestros jóvenes con la institución y con la patria. Durante el ascenso, se hicieron realidad las palabras de: "Escarar montañas hermana hombres", pues estuvo presente la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua entre todos.





## UN MERECIDO HOMENAJE



Las mujeres siempre han sido fuente de ternura, pero también de fortaleza, pues han sabido enfrentar múltiples obstáculos que históricamente les ha impuesto la sociedad.

En el marco del 55 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, la Fiscalía General también se sumó a la felicitación a esta organización, por lo que realizó el 21 de agosto un encuentro en el

que sus trabajadoras tuvieron la oportunidad de compartir experiencias con Teresa Amarille Boué, Secretaria General de la FMC y otras funcionarias de su secretariado.

En el mismo, fiscales que ocupan cargos de dirección en el Órgano Central, fiscalías provinciales y municipales comentaron acerca del papel que desempeñan las mujeres en la Fiscalía General de la República.

## EL MENSAJERO DE LA PAZ

Este 2015 Cuba y la Santa Sede celebran 80 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas, mucha es la historia que une a estas dos naciones. El Vaticano anunció el pasado 11 de mayo la visita del Papa Francisco a nuestra isla, en su ida a los Estados Unidos. De esta forma, Cuba se convirtió en la única nación de Occidente que comparte, con Brasil, el privilegio de merecer la visita de los tres últimos pontífices, pues en 1998 Juan Pablo II nos visitó y Benedicto XVI lo hizo en el 2012.

Su colaboración en el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, anunciadas el pasado 17 de diciembre, pone de manifiesto la vocación solidaria y humanista del alto mando de la Iglesia Católica, expresada también en el lema adoptado para su visita: "Misionero de la Misericordia".

El líder de la Iglesia Católica inició su viaje apostólico el sábado 19 de septiembre, en La Habana, donde el gobierno cubano y el pueblo capitalino le dieron la más cordial bienvenida, posteriormente prosiguió viaje a las provincias de Holguín y Santiago de Cuba.

En los territorios visitados confluieron creyentes y ateos para escuchar a este mensajero de la paz que mucho tiene que decir para el bien de los

hombres, pues el pueblo cubano admira al Papa progresista, al defensor de los humildes, al portador de esperanzas.

La visita de Su Santidad a nuestro país resulta trascendental, sus mensajes apostólicos sirven de guía al perfeccionamiento social que se lleva a cabo en la isla, pues los ideales y los valores humanos que defiende han sido también la brújula orientadora del proceso revolucionario cubano.





# JORNADA

## “Fidel de corazón”

El 4 de septiembre de 1945, el joven Fidel Castro Ruz ascendió los 88 peldaños de la legendaria escalinata de la Universidad de La Habana. El Alma Máter recibía a este futuro abogado y la historia lo inscribía para siempre en sus páginas.

Comenzaba sus estudios de Derecho en la otrora facultad de Céspedes, Agramonte, Mella, Villena, Trejo, Barceló y otros tantos ilustres patriotas que le antecedieron en el ejercicio de esta profesión. Esta casa de altos estudios ha sido y seguirá siendo testigo de momentos trascendentales en la historia de nuestra Patria.

En saludo al 70 aniversario de la entrada del líder histórico de la Revolución cubana a la Universidad de La Habana, la Federación de Estudiantes Universitarios desarrollará la Jornada “Fidel de Corazón”, que se extenderá hasta el mes de diciembre.

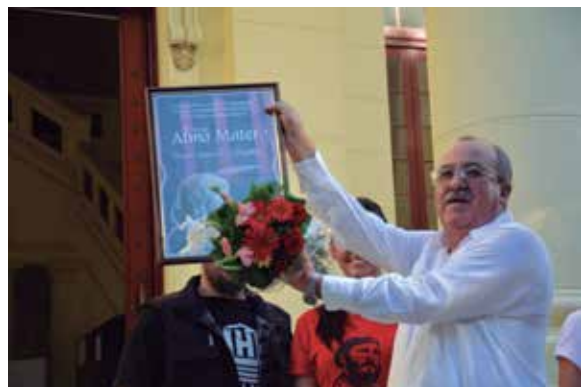
## La universidad: una fragua de espíritu

El 4 de septiembre de 2015, la Universidad de La Habana le concedió a la Fiscalía General de la República el Premio Alma Mater, el cual se le otorga a autoridades e instituciones que han contribuido al desarrollo de este centro. Este Órgano fue merecedor de dicho reconocimiento por contribuir a la formación y participación en las tareas de impacto social de los estudiantes.

Además, recibieron el premio la periodista Katuska Blanco, el realizador Roberto Chile, el periódico Juventud Rebelde y el Tribunal Supremo Popular.

Este día, también como parte de la Jornada Fidel de Corazón, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), de esta casa de altos estudios, realizó el taller “Fidel, sus estudios de derecho y su pensamiento jurídico”. En este encuentro, estudiantes y profesores abordaron diversas facetas de la vida y obra del Comandante en Jefe: como estudiante universitario, su pensamiento iurumanista y su relación con el derecho, en especial con el público.

En esta fecha también se realizó el lanzamiento de la Página Web de la FEU de la Universidad de La Habana y un twitazo dedicado a Fidel Castro Ruz y a los logros de la Educación Superior Cubana.



# Encuentro con la JUVENTUD

POR: JESSICA RIVERO RODRÍGUEZ

Foto: Adrian Lago del Valle

**L**a Fiscalía General de la República no es el primer lugar en el que imaginarias laborando a un periodista, pero desde hace unos meses soy parte de esta institución como profesional de la palabra. Esta es mi primera experiencia de trabajo y todo un reto, por el rigor que este Órgano exige, pero también ha sido un espacio de crecimiento profesional y personal.

Esta institución no es exclusiva de fiscales, en ella, además de periodistas, confluyen diversas profesiones: psicólogos, informáticos, comunicadores, diseñadores, telecomunicadores y especialistas en contabilidad, todos con gran realización laboral. En el quehacer de la fiscalía, los jóvenes son protagonistas. La dirección de este Órgano tiene entre sus prioridades el contacto, formación vocacional y atención a este sector, el cual representa el 37 % de la fuerza fiscal en el país.

A propósito del X Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, que se efectuó en el mes de julio, nos acercamos a cuatro fiscales, menores de 35 años, cuya primera y única experiencia laboral también es la Fiscalía. Con ellas, conversamos sobre sus motivaciones para ejercer esta profesión, los retos que tienen como jóvenes, y los valores y actitudes que distinguen a estos representantes del Estado cubano.

Muchos son los retos que enfrentan estas muchachas, por ser fiscales, por su edad, su condición de mujeres y, en el caso de algunas, de madres. Aunque confiesan que tuvieron diversas razones para elegir esta especialidad, se muestran satisfechas con su elección.

## AIXA MARSÁN BOZA



**A**ixa Marsán Boza, de la Fiscalía Municipal de Habana del Este, nos comenta que esta institución siempre le gustó, “cuando estudiaba dije que quería ser fiscal, conocía lo que hacían, pero no con profundidad, casi siempre el estudiante piensa que es el que participa en el juicio oral, y el fiscal participa socialmente en otras esferas de la vida, que no es solo la parte penal”. Esta especialista en Protección de los Derechos Ciudadanos, declara que finalmente se decidió, pues se percató que los fiscales “velan porque se cumplan las normas establecidas en la sociedad, por el derecho de los ciudadanos, de los niños, las mujeres y la familia en general, y por los intereses de nuestra Revolución, la fiscalía vela por que se cumpla la legalidad en todas las esferas”.



Estos jóvenes profesionales tienen la responsabilidad y el compromiso de servir como ejemplo a las nuevas generaciones. Aixa, quien es madre de tres niños, confiesa que uno de sus grandes retos es equilibrar el rigor del trabajo con la familia, para lo que se auxilia de su familia. Otro de los desafíos que enfrenta es “representar a la juventud de hoy y demostrarles a las personas mayores que somos capaces de cumplir las tareas que se nos asignen. En la fiscalía la juventud cumple un papel fundamental, porque

la mayoría somos jóvenes y también la mayoría tenemos hijos, y aun así nos enfrentamos a una carga de trabajo fuerte y tenemos objetivos de trabajo muchas veces difíciles de cumplir”.

Ella considera que para ser fiscal es esencial tener una amplia preparación política-ideológica, acorde con los principios de la Revolución, y conocimientos jurídicos, “también tenemos que tener otras cualidades, el carácter firme y mucha responsabilidad, ser capaces y mostrar actitud y aptitud en la labor que realizamos”.

## CELIA ABRICH PÉREZ



**E**n el caso de Celia Abrich Pérez, fiscal de La Habana, la relación con la fiscalía comenzó mientras cursaba la universidad, “cuando hice las prácticas docentes, me gustó más el trabajo del fiscal, porque era más diverso (...) yo me desempeño en civil desde que empecé en la fiscalía, pues se asemeja un poco a lo que yo quería, lo que me gustaba del derecho, entonces te vas comprometiendo, te vas engrandeciendo de alguna manera, vas educándote (...) esto es lo que me gusta, aquí es donde soy útil, porque además, cuando conoces a muchas personas que tienen problemas, les resuelves el problema y la persona te está agradecida, dices: creo que aquí es donde debo estar, y por eso que uno se queda. Eso siempre se lo digo a los muchachos

que se insertan de la universidad: «a lo mejor no es lo que quisiste ser, no fue lo que soñaste, ni lo pensaste, porque nunca pasó por tu mente, pero al final, cuando le encuentras las cosas buenas, ves que vale la pena», y por lo menos en mi caso eso fue lo que sucedió”.

Esta joven, que pertenece al Departamento de Protección de los Derechos Ciudadanos, considera que trabajar en esta institución tiene como beneficio la formación del carácter, “cuando tienes que convivir con personas que son mayores que tú, que llevan una vida trabajando, te va permitiendo aprender de ellas, pero también imponer tu seriedad (...) haciéndote una persona más madura. En el orden personal te forma, porque yo trabajo con niños y familias, y te enseña todo lo que a las personas les está pasando, que tú puedas llevar de manera positiva para tu casa”.

Según Celia, a los fiscales los distingue el trabajo con temas sensibles, “que pueden afectar desde un niño, un anciano a una empresa, nosotros en casi todo podemos entrar, pero son temas a los que le tienes que buscar solución, o por lo menos encaminar de la mejor manera. Es importante trabajar en la fiscalía porque ayudamos a muchas personas”.

**ANNIA HERNÁNDEZ MIRANDA**

Por su parte, Annia Hernández Miranda, fiscal provincial de La Habana, señala que al concluir la carrera de Derecho le ofrecieron como alternativas laborales el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República, “de las dos opciones preferí la fiscalía, porque lo sentí como un trabajo más dinámico (...) la consagración es a veces la que te hace llevar más tiempo, pero el trabajo es interesante”. Ella considera que su principal reto es: “en ciertas circunstancias, precisamente por la edad, hacerle entender a los ciudadanos que más que joven, soy fiscal, porque las personas me ven y dicen: «ah, es una muchachita y con ella podemos hacer cualquier cosa”, y tú tienes que demostrarles que a pesar de tu juventud eres fiscal y puedes enfrentarlo todo”.

Esta especialista en verificaciones fiscales, estima importante para ejercer la profesión, “demostrar carácter, ser justo pero con la óptica de la realidad y los intereses de la institución o del país, la honestidad, la ética y la integralidad”. Además, manifiesta que la fiscalía le ha brindado “preparación en muchas de las esferas de la vida, desde el punto de vista administrativo, penal y laboral, o sea, la superación personal ha sido cotidiana”.

**FÁTIMA ABDULA RUIZ**

El ser fiscal entraña sacrificios, limitaciones y esfuerzos, y más en sus primeros años, pero también una gran satisfacción personal, así lo percibe Fátima Abdula Ruiz, de la Fiscalía Provincial de La Habana. Además, señala que es un privilegio, pues permite representar al Estado, dirigir una investigación, realizar una acusación, celebrar un juicio, “eso es una experiencia muy rica, que no todos los profesionales que se gradúan de Derecho pueden experimentar”.

# PONENTIAS

*Las ponencias siguientes fueron presentadas por Rafael Pino Bécquer y Luis Lorenzo Palenzuela Páez en el Seminario Internacional "Hacia la Construcción del Nuevo Sistema de Justicia Penal" que se desarrolló en Cochabamba, Bolivia, entre los días 21 y 23 de julio de 2014, como parte del Segundo Encuentro Nacional del Ministerio Público.*

## Enfoque preventivo del Sistema Penal Cubano



**RAFAEL PINO BÉCQUER**  
EX VICEFISCAL GENERAL  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

### EL ENFOQUE PREVENTIVO DEL SISTEMA PENAL CUBANO

El derecho penal cubano, es un nuevo derecho, con una posición mucho más adelantada que otros países del continente y en mejores condiciones, en estos momentos, para perfeccionar aún más sus instituciones y su sistema en conjunto, lo que no significa que el modelo penal cubano constituya un ejemplo inmaculado, obra finalizada, pues en realidad ha de ser objeto de nuevas perfecciones, pero las realizadas hasta el momento lo ubican en condiciones de conseguir a corto plazo las modificaciones deseadas.

### ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA PENAL CUBANO

El sistema penal cubano está estructurado por un conjunto de órganos y organismos que actúan armónicamente como son, los tribunales populares en sus diferentes instancias, la

Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior, integrado este por la Policía Nacional Revolucionaria, la Dirección General de Investigación Criminal y Operaciones y la Dirección de Establecimientos Penitenciarios.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimiento Penal, corresponde a la Policía Nacional Revolucionaria, a la Dirección de Investigación Criminal y Operaciones o a la Fiscalía General de la República, la investigación de todo hecho presuntamente delictivo, radicándose al efecto la correspondiente denuncia o el expediente de fase preparatoria, para realizar las diligencias y acciones de instrucción que correspondan, en aras de comprobar la ocurrencia del delito y la responsabilidad de sus autores, tomando en cada caso las decisiones penales o administrativas que correspondan.

El sistema judicial, regulado en la Constitución cubana en el Capítulo XIII "Tribunales y Fiscalía", desempeña un papel esencial en la protección de los derechos humanos.

La Fiscalía General de la República es el Órgano del Estado al que corresponde, como objetivos



fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.

Como Órgano independiente, creada en 1973, cuenta ya con más de 40 años de experiencia. En la esfera penal, como controlador de la legalidad durante la fase preparatoria, la figura del Fiscal ha mostrado resultados eficientes en evitación de que se cometan violaciones de la ley o restableciendo las que se han cometido, al punto de ganarse la confianza de la ciudadanía que la aprecia en sus funciones, como un verdadero Órgano defensor del pueblo, de la ley y la justicia.

El Fiscal cumple a cabalidad con la fase intermedia del proceso penal, la que se encuentra a su cargo, y ejerce funciones de observancia de la ley durante la investigación primaria, la fase preparatoria y el juicio oral.

El sistema judicial es coherente con las exigencias internacionales, en particular con las decisiones de los Congresos de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal y a los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, en los que se consagra, entre otras cuestiones, el principio de independencia individual y colectiva de los jueces, pues en su función de impartir justicia los jueces cubanos no deben obediencia más que a la ley.

En Cuba existe un sistema de órganos independientes, encabezados por el tribunal Supremo, que actúan de forma colegiada, con una composición de acuerdo con su competencia y con una amplia participación popular en la impartición de justicia.

Los principios de legalidad, participación ciudadana, la presunción de inocencia, el de objetividad, la reparación del error judicial, la no discriminación, la determinación de la pena, la igualdad entre las partes, la titularidad de la acción penal, la oralidad, la publicidad, la intermediación, la concentración, contradicción, apreciación y fundamentación de la pruebas, la

protección a las víctimas, así como los demás principios del debido proceso legal y justo, están incorporados al ordenamiento penal vigente y son respetados en la práctica.

La acción penal se ejercita ante el órgano jurisdiccional competente para conocer de la acusación contra el presunto culpable por los hechos delictivos que se le imputen, siendo el fiscal quien la ejercita luego de considerar completo el expediente de fase preparatoria remitido por los actuantes, formulando las conclusiones provisionales que correspondan y poniendo a disposición del tribunal al acusado.

En el juicio oral el acusado, si lo quisiese, manifestará lo que estime necesario en relación con los hechos que se le imputen, pudiéndose abstener de declarar y de responder a las preguntas que se le formulen.

El acusado estará presente en todo momento durante la práctica de pruebas en el plenario, y en las que por alguna razón no pueda hacerlo personalmente, estará representado por su abogado.

Aunque corresponde a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y en apego a los convenios internacionales suscritos, garantizar con sentido profundamente humano, el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad dispuestas por los tribunales y la reinserción de los sancionados en la sociedad, la Fiscalía General de la República tiene como funciones específicas que el Fiscal controle la legalidad de las disposiciones en este sentido.

Con apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y el sistema normativo cubano, que ha jerarquizado con rango constitucional los postulados básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los llamados Pactos de Derechos Humanos, es decir, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, existe un perfeccionamiento sistemático de la legislación penitenciaria y su base reglamentaria, dando respuesta a los 95 preceptos de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y las reglas de Bangkok,

destacándose, dentro de los principales avances los siguientes:

- Las normativas que regulan la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad, son de obligatorio cumplimiento y se aplican de manera imparcial sin hacer distinción de raza, color, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Su incumplimiento está proscrito y es sancionado por la Ley.
- Los tratos crueles, inhumanos o degradantes, son contrarios a los fundamentos, principios y valores que sustentan nuestro sistema.
- Para el control sistemático de la población penal, se establece la obtención periódica de informaciones estadísticas, a través de medios automatizados, no existiendo la posibilidad de que permanezcan en los establecimientos penitenciarios “presos olvidados”.
- El Sistema Penitenciario comprende la aplicación de un régimen progresivo como método para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad. En tal sentido, los internos tienen derecho a progresar en régimen, a la rebaja de sanción de 60 días por año cumplido, a la concesión de la libertad condicional o suspensión de la medida impuesta; siempre que hayan cumplido los requisitos de término y conducta previstos en la ley y en el Reglamento del Sistema Penitenciario.
- El trabajo constituye uno de los eslabones primordiales de la cadena de actividades dirigidas a la rehabilitación de los internos para su plena reinserción social. No tiene un carácter aflictivo ni punitivo. La incorporación a la actividad laboral es voluntaria y reciben remuneración salarial con arreglo a la legislación y las regulaciones vigentes en el país para cualquier otro ciudadano. El tiempo de trabajo durante el cumplimiento de la sanción cuenta para el derecho a la jubilación.
- El sistema penitenciario, previa solicitud de las familias, o de los propios internos, promueven las ayudas económicas a los familiares de los que así lo requieran, lo que se garantiza por el sistema de seguridad y asistencia social del país.
- Está organizado un subsistema educacional en los establecimientos penitenciarios para la enseñanza general y técnica gratuita, garantizándose los certificados de escolaridad o de oficios adquiridos durante su internamiento.
- Existe un subsistema de atención médica y estomatológica, primaria y especializada, sustentados en una red que incluye hospitales, puestos y postas médicas, áreas reservadas en hospitales del sistema de salud pública y equipamiento, instrumental y abastecimiento necesario de medicamentos. Existe un médico por cada 300 internos, un estomatólogo por cada 1 000 para la atención preventiva, asistencial y especializada y una enfermera por cada 120.
- Los internos mantienen la comunicación sistemática con sus familiares, mediante visitas, el uso de pabellones conyugales, contactos telefónicos y correspondencia. Los sancionados pueden, asimismo, ser beneficiados con pases o visitas especiales al hogar sin custodia. Tienen el derecho a ser conducidos o autorizados, según corresponda, en casos de enfermedad grave o muerte de familiares allegados.
- Se desarrollan actividades de amplia participación en las esferas artísticas, deportivas y recreativas. Se realizan visitas demostrativas bajo custodia a centros culturales, deportivos, históricos y económicos. Se propicia también el disfrute de los medios masivos de difusión. Los internos tienen además la oportunidad de compartir con personalidades destacadas del arte, la cultura y el deporte que visitan los centros penitenciarios.
- Los privados de libertad, reciben alimentación adecuada, con valor nutritivo y consumen agua potable, pudiendo recibir de sus familiares productos y artículos de acuerdo a los procedimientos establecidos, además reciben gratuitamente los artículos de aseo personal, lencería y uniforme.
- Las mujeres son ubicadas en centros penitenciarios exclusivos, atendidos directamente por personal femenino debidamente preparado.
- Las internas embarazadas y paridas reciben atención médica especializada y son trasladadas a salas especiales materno-infantiles

habilitadas en los centros penitenciarios femeninos para su cuidado. El parto es atendido por personal médico y ocurre en condiciones hospitalarias. Les corresponde también una dieta alimentaria reforzada durante el embarazo y hasta el cumplimiento del primer año de vida del niño, período en el que la interna permanece junto a su hijo, garantizándole la lactancia. Transcurrido este plazo de tiempo, pueden entregarlo a sus familiares o internarlo en un Círculo Infantil libre de costo.

- Los internos jóvenes también reciben un tratamiento diferenciado. Se les ubica en establecimientos penitenciarios para esta categoría o en áreas separadas de las prisiones de adultos y son atendidos por personal seleccionado.
- Los extranjeros se ubican en centros y áreas de reclusión independientes y se les garantiza la asistencia consular, el respeto a sus tradiciones culturales y se les brindan facilidades para la adquisición de productos alimenticios, de aseo y uso personal.
- A los acusados que se les impone la medida cautelar de prisión provisional, se ubican en centros o áreas independientes al resto de la población penal. Se trabaja sistemáticamente por reducir el plazo de enjuiciamiento y sentencia al mínimo indispensable para garantizar el respeto estricto de los requerimientos del debido proceso. Está garantizada la asistencia jurídica a los detenidos, tanto en materia de derecho civil como penal y se facilitan los contactos personales con sus representantes legales.
- Se garantiza la asistencia religiosa de manera individual y colectiva a aquellos internos que la soliciten y puede ser impartida por representantes de las organizaciones religiosas registradas oficialmente en el país. En los centros de reclusión se facilitan las áreas o locales para la realización de estas actividades y se autoriza a los reclusos a recibir y poseer los textos oficiales de su religión.
- Existe un procedimiento para corregir las infracciones a la disciplina. El interno hallado culpable, tendrá derecho a reclamar ante el nivel que corresponda. No pueden imponerse medidas disciplinarias que afecten los

derechos relacionados con la alimentación, vestuario, asistencia médica y estomatológica, visitas con los abogados etcétera.

- Los privados de libertad, al igual que el resto de los ciudadanos, tienen derecho constitucional a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes en el plazo establecido en la Ley.
- De conformidad con las Reglas Mínimas de la 9 a la 16 de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, las celdas disciplinarias se utilizan de manera excepcional en aquellos casos de infracciones graves de la disciplina, cuenta con las dimensiones establecidas, con ventilación e iluminación natural e instalaciones sanitarias con la privacidad requerida.
- La muerte de una persona privada de libertad en Cuba queda sujeta a una investigación y a la determinación de las causas, siendo obligatorio para ello la creación de una Comisión médico-legal bajo la dirección de un Fiscal, donde participa un instructor, el médico forense y autoridades del centro, procediéndose a realizar la Necropsia del cadáver, informándose a los familiares de los resultados y, de comprobarse una violación de la legalidad en la actuación de las autoridades, la misma quedaría sometida a la aplicación de la Ley.
- Toda persona cuyo estado de salud sea incompatible con las condiciones de privación de libertad en que se encuentra, recibe la respuesta adecuada a su caso, en virtud de los beneficios que prescribe la Ley para brindar una solución humanitaria a sus necesidades, entre estas se encuentra la licencia extrapenal.
- Todo ingreso que se realice a los locales de detención de la Policía Nacional Revolucionaria o a un Establecimiento Penitenciario, está precedido por el correspondiente reconocimiento médico, que permite entre otras acciones, la dispensarización desde el punto de vista de salud.
- En Cuba, los médicos y el personal de la salud en general son educados en el principio de brindar protección a la salud física y mental, con independencia de las características del enfermo. De esa forma, todos los inter-



nos o detenidos reciben asistencia médica en igualdad de condiciones que las personas que no están privadas de su libertad. A toda la población penal se le garantiza de forma gratuita la atención médica y estomatológica.

- El Sistema Penitenciario cuenta con hospitales, centros asistenciales y puestos médicos. Al mismo tiempo, se adoptan medidas de control riguroso para evitar que las personas detenidas puedan auto-agredirse.

Es una realidad que el sistema penal cubano, funciona con eficiencia y agilidad. No padece del congestionamiento que muestran los tribunales y el resto de las instituciones del sistema, en casi todos los países latinoamericanos; no se confronta el problema del preso sin condena como se le ha denominado en la región, por la gran cantidad de personas que esperan durante años para ser declarados culpables o inocentes; la corrupción es un fenómeno ajeno y excepcional a la realidad jurídica del país; y la menor igualdad económica -posible- de la sociedad se refleja en la igualdad jurídica sin que existan diferencias de clase en el tratamiento que se dispensa, lo cual se observa en los trámites durante la fase preparatoria y el juicio oral, así como en la propia forma de existencia que mantienen los internos en los establecimientos penitenciarios.

Es decir que la gratuidad de la justicia resulta efectiva y la diferencia de ingresos económicos no tiene repercusión en el procedimiento penal, en las garantías y en el disfrute de los derechos de los acusados, procesados o sancionados.

En esta agilidad influye el sistema procesal establecido en el país, que con los cambios introducidos en busca de su perfeccionamiento, puede calificarse como un sistema acusatorio mixto moderno, el cual en los delitos graves competencia de los tribunales provinciales y los menos graves competencia de los tribunales municipales, tienen una fase preparatoria con marcado peso inquisitivo y con una fase intermedia y juicio oral esencialmente acusatorio moderno; mientras que el procedimiento para los tribunales municipales populares que conocen de los delitos leves, no tiene fase preparatoria y es sustancialmente acusatorio.

En todos los casos, siguiendo la experiencia de más de un siglo, el proceso concluye con el juicio oral, del que deviene la correspondiente sentencia, sancionadora o absolutoria. Además, este procedimiento es contradictorio, contemplando la participación del defensor desde la fase preparatoria, pudiendo aportar o proponer pruebas, cuando hay procesado sujeto a alguna medida cautelar. Toda sentencia es recurrible por las partes, ante la instancia superior.

La concepción del empleo mínimo del Derecho Penal se ha arraigado en el país y particularmente entre los especialistas del derecho penal, sobre todo después del proceso de despenalización que sufrió el derogado Código Penal, aprobado en 1977 y sustituido por el vigente, en el año 1987, surgiendo instituciones alternativas a la represión penal, como lo es el Reglamento de la Responsabilidad Material, que establece el pago de compensaciones por la pérdida o daños a bienes y la proliferación de normativas administrativas, contravencionales, que contemplan sanciones de multas.

La consideración del Derecho Penal como última ratio ha cobrado fuerzas, aunque por épocas despiertan sus opositores y propugnan el regreso a la aplicación masiva del Derecho Penal y la imposición de sanciones desproporcionadas, como método para enfrentar el delito.

El vigente Código Penal —a pesar de las modificaciones que le introdujo la Ley No. 87 de 1999— se afilia a esta tendencia mínima de la aplicación del Derecho Penal y con sentido humano y social, contiene una serie de instituciones de suma importancia, encaminadas a dar un tratamiento individualizado a cada comisor de delito, y además, los operadores del sistema de justicia penal así lo interpretan y aplican.

El Código Penal incluye una gama variada de sanciones y alternativas a las penas, especialmente en cuanto a la privación de libertad, que lo sitúan como un adecuado instrumento para seleccionar la medida represiva conveniente al infractor.

Particularmente, las sanciones privativas de libertad pueden ser sustituidas por las de trabajo correccional con internamiento, trabajo correccional sin internamiento o limitación

de libertad, siempre y cuando sean sanciones no superiores a cinco años de privación de libertad, lo que evita que el sancionado ineludiblemente tenga que extinguir la pena en una prisión, pudiendo hacerlo en un centro habilitado al respecto o en su propio centro laboral, bajo la vigilancia de la administración y las organizaciones sociales y sindicales del lugar; o simplemente quedar en libertad sujeto al control de las organizaciones sociales y de masas de su zona de residencia, así como de la policía, de las cuales el tribunal recibe informaciones periódicas a través del Juez de Ejecución de sanciones no privativas de libertad, sobre quien ya expliqué anteriormente, la experiencia que se posee en el país.

Esta misma sistemática se debe emplear en cuanto a la apreciación de la reincidencia y multirreincidencia del acusado, eliminando la aplicación obligatoria por parte del tribunal actuante y dejando esa valoración a la facultad arbitral del juzgador, lo que permite que en ciertos casos, en los cuales esos antecedentes son de escasa connotación, o no tienen vínculo con el nuevo delito, o no denotan una tendencia en la conducta del acusado o por el tiempo transcurrido, no se deba apreciar su concurrencia, el tribunal disponga lo que considere procedente.

Con esta misma tónica, se recoge en la legislación, la posibilidad de que el tribunal sancionador otorgue al privado de libertad, la Libertad Condicional, siempre atendiendo a su comportamiento y después de haber cumplido una parte de la sanción impuesta.

Esta Libertad Condicional, como su propio nombre lo indica, consiste en otorgar la libertad al recluso antes de que extinga totalmente la pena, bajo ciertos requisitos y con la observación posterior de su comportamiento.

Ello implica un control constante y sistemático, así como un trabajo de influencia y orientación, en cuanto a la conducta del penado, durante la ejecución de la medida impuesta, procurando su reinserción a través del trabajo y las actividades sociales organizadas en el centro, lo cual constituye una tarea mancomunada de personas, familias, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, y del Estado, bajo el control del Juez de Ejecución.

El Código Penal, como antes enuncié, con el fin de darle un curso ágil y una adecuada respuesta a los delitos leves, denominados por algunos como “bagatela”, aquellos cuya sanción máxima en el texto penal es de hasta tres años de privación de libertad o multa de hasta 1000 cuotas, o ambas, introdujo la variante de facultar a la autoridad actuante, para disponer la imposición de una multa administrativa al infractor, siempre que la comisión del hecho evidencie escasa peligrosidad social, tanto por las condiciones personales del infractor como por las características y consecuencias del hecho, la cual nunca podrá ser inferior a doscientos pesos, ni superior a 7 mil pesos; así mismo se dispondrá por el actuante la responsabilidad civil correspondiente, a tenor de lo establecido en la ley, y podrá aplicarse el comiso de los efectos o instrumentos del delito.

Si la persona a quien se le aplica esta multa administrativa está inconforme con ella o no la abona, o no cumple con las obligaciones civiles dispuestas, entonces la autoridad actuante remitirá las actuaciones al tribunal correspondiente para que el asunto sea ventilado en juicio oral, con lo que se le ofrece al acusado la garantía suficiente para defenderse adecuadamente de la imputación.

Si el infractor paga la multa y cumple con las obligaciones civiles, el hecho, a los efectos penales, no se considerará delito. Esta institución ha permitido la solución de una gran cantidad de asuntos por esa vía, sin necesidad de que el conflicto llegue al tribunal. La experiencia en sus años de aplicación, desde 1997 hasta la actualidad, ha mostrado su eficacia y utilidad práctica, constituyéndose en un magnífico instrumento descongestionador del sistema penal.

El Código Penal cubano también contempla en algunos delitos requisitos de perseguibilidad, como la necesaria denuncia del perjudicado, tal como en el caso de delitos de Daños, en ocasión del tránsito, cuando su cuantía es inferior a determinada cifra lo cual se combina con la posibilidad de desistir de su denuncia en cualquier momento anterior al juicio oral o durante éste, en cuyo caso se procede al archivo de las actuaciones.

Otros ilícitos contemplan soluciones similares, como requisito de perseguibilidad, especialmente en los delitos sexuales o contra el normal desarrollo de la familia, lo que posibilita vías de solución de estos conflictos, cuando ello no represente un peligro para la sociedad, sino una infracción de derechos o bienes individuales de quienes desisten de la persecución penal.

La lucha contra el fenómeno delictivo debe lograrse con eficacia y eficiencia, de ahí que la celeridad del proceso penal en la etapa investigativa del delito tiene un doble propósito, por una parte en la realización del Derecho Penal con eficacia en beneficio de la sociedad contra el fenómeno del delito, y por la otra, en enfrentarlo sin menospreciar los derechos humanos fundamentales del imputado, lo que ha sido considerado por Roxin “como el atractivo y la dificultad característicos del Derecho Procesal Penal”, y que al decir de Carnelutti “El sufrimiento del inocente es, desgraciadamente, el costo insuprimible del proceso penal”.

Por ello, uno de los problemas más importantes al que se enfrenta el Derecho Procesal Penal en la actualidad es el de la duración del proceso, lo cual equivale al tiempo que demore la neutralización del principio de inocencia, de modo que en el menor tiempo posible se pueda terminar la investigación porque el estado de inocencia frente al hecho quedó demostrado definitivamente a favor del imputado, o bien quedó suprimido también por la decisión firme del Estado de la necesidad y del deber de imponerle una sanción ante la evidencia de su responsabilidad, porque la pena es estatal, y solo puede ser aplicada por un tribunal penal, imparcial, y a través de un proceso sin dilaciones indebidas.

Por eso el Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la justicia a todos los habitantes, y para ello, no solo tiene que crear una estructura de órganos capaces que presten el servicio de justicia, sino además, un procedimiento que permita con respeto al derecho de las personas, obtener una decisión justa, basada en la verdad.

La celeridad del proceso penal en la etapa investigativa posee gran importancia en el contexto actual debido a que la tranquilidad ciudadana constituye una de las conquistas de

la Revolución cubana, por la cual nos diferenciamos de muchos países de América Latina, que aún con mayor crecimiento económico, sus sistemas de seguridad pública no contribuyen a esa tranquilidad. La sociedad cubana con la adopción de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para actualizar el modelo económico cubano, como garantía de la continuidad e irreversibilidad del Socialismo, el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población, conjugados con la necesaria formación de valores éticos y políticos de nuestros ciudadanos, necesita preservar los niveles de tranquilidad pública que hasta hoy nos ha caracterizado y fortalecer la institucionalidad como bases indispensables para la seguridad nacional.

El 23 de diciembre de 2011 la Asamblea Nacional del Poder Popular en la rendición de cuentas del Fiscal General de la República ante ese Órgano superior del Estado le recomendó: “Incrementar los niveles de exigencia y análisis, en aras de imprimir mayor calidad en los procesos penales que se tramiten, consolidando los niveles de celeridad alcanzados”.

El cumplimiento de las políticas aprobadas en el Anteproyecto de Ley de Procedimiento Penal permite atemperar nuestra legislación al nuevo escenario socio-económico, al perfeccionamiento de la práctica judicial cubana, a los avances más significativos de la ciencia jurídica moderna y a los postulados de las Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por el Estado cubano.

En general, el Anteproyecto de Ley de Procedimiento Penal contiene como aspectos importantes los siguientes:

- La incorporación del concepto del proceso penal y la definición de los sujetos procesales, sus facultades, derechos y atribuciones.
- La consideración de la víctima o perjudicado como sujeto procesal, con la posibilidad de adherirse a la acusación del fiscal o sostenerla cuando este la retire en el acto del juicio oral.
- La incorporación de las técnicas especiales de investigación para permitir su aplicación en el proceso penal, previo el cumplimiento



de los requisitos y formalidades, en aras de garantizar una mejor respuesta penal.

- El sobreseimiento condicionado como facultad del fiscal de no ejercitar la acción penal en determinados casos previstos por la Ley, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.
- La exigencia de la responsabilidad civil por parte de la víctima o perjudicado, que puede ejercitarla conjuntamente con la penal, en el escrito acusatorio del Fiscal o posteriormente ante el tribunal de lo civil o renunciar a ella.
- La inclusión de acuerdos reparatorios entre la víctima o perjudicado y el imputado, en determinados delitos patrimoniales, para garantizar el resarcimiento.
- La posibilidad de que el acusado y su abogado, al comienzo del juicio oral, expresen su conformidad con las conclusiones acusatorias y con la sanción interesada, permitiendo al tribunal, con la anuencia de la víctima, decidir si estima dictar sentencia sin otro trámite, en cuyo caso no podrá imponer sanción mayor ni más grave que la solicitada por la acusación, para todos los delitos, excepto en los que se haya interesado sanción de privación perpetua de libertad o muerte.
- La representación del acusado por más de un defensor y la asistencia del fiscal por uno o varios fiscales en el acto del juicio oral.
- La facultad del fiscal para no ejercer la acción penal aplicando criterios de oportunidad en determinados casos previstos taxativamente en la Ley.
- La persecución del delito es pública y obligatoria. El fiscal deberá ejercer la acción penal pública en todos los casos en que sea procedente, con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

No obstante, podrá prescindir, total o parcialmente, de la persecución penal o limitarla a alguna o algunas infracciones o personas participantes en el hecho en los casos siguientes:

1. Cuando se trate de un hecho de escasa entidad y las circunstancias personales del imputado sean positivas; ello presupone que el

hecho en sí no haya producido alarma o repudio y sus consecuencias no sean especialmente dañosas o peligrosas y que el imputado sea persona cumplidora de sus deberes laborales, sociales y familiares o educacionales, y carezca de antecedentes por delitos intencionales.

2. Cuando el imputado colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar que continúe cometiéndose el delito o se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la sanción que corresponda al hecho punible de cuya persecución se prescinde, sea menor que la de aquellos cuya persecución facilita o cuya continuación evita.

El ejercicio de esta facultad se limitará a los hechos o las personas en cuyo favor se aplicó este supuesto de oportunidad.

3. Cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia de la conducta imprudente, daño físico o psicológico grave que aconseje la no aplicación de una sanción penal.
4. En el caso de los delitos patrimoniales que no hayan sido cometidos con violencia, cuando exista acuerdo entre el imputado y la víctima o perjudicado.

En todos estos casos será requisito indispensable para su aplicación que el imputado satisfaga la responsabilidad civil derivada del delito antes de proceder al archivo de las actuaciones o exista acuerdo con la víctima o perjudicado para su resarcimiento.

- La nulidad de actuaciones defectuosas o violatorias de derechos y garantías por parte del tribunal, así como del fiscal y el instructor penal cuando dichas violaciones se detecten durante la fase previa al juicio oral.
- La regulación de la cadena de guarda y custodia de los bienes ocupados, incluyendo las huellas, indicios y vestigios captados en el lugar del hecho.
- La incorporación de nuevas medidas cautelares aplicables a las personas naturales.

Además de la prisión provisional, las medidas cautelares para las personas naturales que esta Ley autoriza son:

- fianza en efectivo;
- fianza moral por la empresa o entidad donde trabaje el acusado o el sindicato u otra organización social o de masas a que pertenezca;
- arresto domiciliario;
- obligación contraída en acta de presentarse periódicamente ante la autoridad que se señale;
- prohibición de salida del territorio nacional;
- prohibición de expedición de pasaporte;
- prohibición de acercamiento a las víctimas;
- suspensión temporal de la licencia de conducción;
- fianza, embargo y depósito preventivo de bienes;
- retención o prohibición de enajenar.

### **La incorporación de medidas cautelares imponibles a las personas jurídicas**

Las medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas son:

- a) embargo preventivo de bienes;
  - b) anotación preventiva en registro público;
  - c) suspensión o abstención de actividad;
  - d) nombramiento de uno o más interventores;
  - e) prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados;
  - f) clausura temporal, parcial o total de sus locales o establecimientos;
  - g) cualquier otra medida tendente a evitar la continuación de los actos perjudiciales al ambiente.
- La regulación de los términos y plazos de las diferentes resoluciones y la ampliación de los plazos para la redacción de las conclusiones provisionales de la acusación y la defensa, así como para radicar causa por el tribunal y para elaborar la sentencia.
  - El perfeccionamiento de las regulaciones de las formalidades de las sentencias y la redacción del escrito acusatorio del fiscal.
  - La incorporación del procedimiento para

juzgar a la persona jurídica.

- La inclusión de las cuestiones que se derivan de la cooperación penal internacional, conforme a los convenios suscritos y ratificados por el país, especialmente lo relacionado con la extradición activa y pasiva y las comisiones rogatorias.
- La actualización del procedimiento de revisión, reagrupando y ajustando sus causas a los motivos que sobrevienen con posterioridad a la firmeza de la sentencia.
- La ampliación de las reglas del procedimiento sumario para los delitos sancionables hasta tres años de privación de libertad y la incorporación del procedimiento del atestado directo, con definición de los requisitos en los que procede y sus términos.

El sistema penal cubano, sin ser, ni pretender ser, una obra acabada y perfecta, pero con plena conciencia del postulado martiano de que “en prever está todo el arte de salvar”, tiene en el centro de sus estrategias la prevención del delito, en evitación de sus costos sociales y económicos.

En esa ardua y difícil batalla se ha trabajado y se trabaja en Cuba, en esa dirección se encamina todo el esfuerzo de nuestro pueblo, consciente que sin solucionar los problemas sociales y convertir a los seres humanos en el epicentro de toda la labor del Estado y la sociedad no es posible sustentar un sistema preventivo viable y sostenible.

Concluyo también con las premonitorias palabras del compañero Fidel, cuando expresó

*“(...) somos un montón de países con intereses comunes, ansias de progreso y desarrollo, (...) hay que trabajar, persuadir, luchar y preservar. Jamás desalentarse”.*

### **NOTAS**

<sup>1</sup> Licenciado en Derecho de la Universidad de La Habana y Máster en Derecho Público de la Universidad de Valencia. Especialista en Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional. Esta ponencia fue presentada cuando aún ocupaba el cargo de Vicefiscal General de la República de Cuba. En la actualidad se desempeña como Especialista de la Dirección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX)

# LA EJECUCIÓN PENAL EN CUBA



LUIS L. PALENZUELA PÁEZ  
EX FISCAL  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA<sup>1</sup>

*Estimados colegas, amigas y amigos:*

Agradecemos la invitación de los organizadores de este Seminario Internacional, que nos permitirá participar en los espacios de debate que se generen y contribuir, modestamente, en la obtención de los lineamientos destinados a la construcción de un nuevo sistema de justicia penal integral y garantista en Bolivia, lo que se encuentra dentro de sus objetivos.

## INTRODUCCIÓN

Deseo iniciar la disertación resaltando el ejercicio del poder jurisdiccional como facultad dimanante de la soberanía. Solo los tribunales de un Estado determinado pueden dictar sentencias y resoluciones judiciales, así como disponer su ejecución. Se trata, pues, de una potestad que no viene atribuida, en principio, a otros órganos y organismos. La consecuencia directa

e inmediata de la violación de estos principios sería la ineficacia de las sentencias y resoluciones judiciales y la imposibilidad de ejecutarlas.

Ante todo, debe reconocerse la fuerza ejecutiva de la sentencia, que lleva aparejado el efecto de cosa juzgada material de su contenido, lo que vincula a las autoridades y órganos jurisdiccionales y se activa el principio “*nom bis in idem*”, que no solo impide la iniciación de un nuevo proceso con idénticas partes, objeto y causas, sino que también impide que se vuelva a suscitar en cualquier otro proceso.

En el caso de Cuba, no solo se vinculan en la ejecución penal aspectos de orden teórico-doctrinal y jurídicos, sino elementos de nuestra historia y cultura, con una visión inclusiva. Preside las acciones correspondientes un pensamiento de José Martí Pérez, que aparece en el Preámbulo de la Constitución de la República de Cuba, aprobada por referendo, con el voto afirmativo del 97,7 % de los electores, que declara la voluntad de los cubanos de que la ley de leyes de la República esté presidida por este profundo anhelo, al fin logrado: “*Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre*”.

Ese anhelo del apóstol de la independencia cubana, forma parte del patrimonio principal de la nación que es su cultura, en la que juegan un papel esencial los conocimientos jurídicos o como también pudiera llamarse la “cultura jurídica”, especialmente la relacionada con la importancia que se le confiere a los derechos fundamentales de cada individuo, a la familia en nuestra sociedad, a la formación y protección de la niñez y la adolescencia, que es, sin dudas, una de las grandes preocupaciones del mundo contemporáneo, junto a la formación y desarrollo de los valores, tanto por la familia como por la Sociedad y el Estado, en particular por las instituciones educativas y los medios.



Uno de los pensamientos esenciales del Héroe de nuestra independencia y brújula de nuestra cultura, José Martí y Pérez, dice: “Ser cultos para ser libres”, que consideramos un mensaje literario con hondo matiz estratégico, especialmente en esta etapa globalizadora y de cambio de época para la humanidad, cuando la cultura ha animado el espíritu de resistencia de la nación cubana frente a todo tipo de agresiones, porque con acierto se ha dicho que la cultura es el alma de la nación.

Con una sólida formación de la ciudadanía se salva la cultura y se salva la nación, porque nos identifica y preserva, nos permite dialogar, interpretar y apropiarnos de la legítima y auténtica cultura universal, manteniendo nuestra memoria propia, convertida en tradición, para seguir desarrollando la conciencia del futuro común, que va del individuo a la colectividad y de la nación a la comunidad internacional, como reivindicación del ser humano con su historia y con sus problemas comunes.

También el Estado cubano guía sus acciones amparado en el principio constitucional de que “Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen”, para lo que ha ido estableciendo los mecanismos y procedimientos, mediante los cuales los tribunales populares y la Fiscalía desarrollan sus actividades de control, influencia y atención a

las personas que cumplen sanciones privativas de libertad como internos, así como sanciones subsidiarias a la privación de libertad, medidas de seguridad y beneficios de excarcelación anticipada en condiciones de libertad en la comunidad, pero sujetas a determinadas obligaciones y limitaciones.

Durante más de treinta y cinco años se han acumulado experiencias y resultados por la labor de la Fiscalía General de la República de Cuba, en la atención a los internos (recluidos en establecimientos penitenciarios), y por más de diez años por los tribunales populares, con los que cumplen sanciones subsidiarias y las demás modalidades antes enunciadas, manteniendo su residencia en su medio familiar y comunal, todo lo que se ha ido enriqueciendo con los criterios y opiniones en torno a su impacto positivo, junto a la creciente confianza de la sociedad y de los órganos que intervienen en la administración de la justicia penal, sobre su necesidad y utilidad, que compulsa a los operadores del Derecho Penal a continuar trabajando en su perfeccionamiento y consolidación.

Estas acciones se atemperan al marco de la evolución actual del modelo socio-económico cubano, sin prisa pero sin pausa, donde se hace indispensable imbricar el trabajo mancomunado de órganos, organismos, organizaciones de la comunidad y demás entidades, en las acciones de control, influencia y atención hacia las personas sancionadas, en correspondencia con los escenarios que van apareciendo, que se enlazan con el empleo, la institucionalidad y el desarrollo de la actividad de prevención y atención social.

La Ley 82 del 11 de julio de 1997, “De los Tribunales Populares”, establece que: “la legalidad está garantizada en la actividad judicial por la obligación de los tribunales de ejecutar efectivamente los fallos firmes que se dicten y de vigilar el cumplimiento de estos por los organismos encargados de intervenir en el proceso de ejecución; así como realizar las actuaciones que dispongan las leyes procesales correspondientes, cuando la ejecución de sus fallos incumba a otros organismos del Estado”.

Su carácter popular está dado, entre otras razones, porque en su integración intervienen jueces profesionales graduados de Licenciatura en Derecho, y Jueces Legos, que es la dotación de trabajadores y ciudadanos, que integran los tribunales, todos los que son elegidos por las asambleas del Poder Popular en las diferentes instancias, para que administren justicia, y sus decisiones siempre son colegiadas, con igualdad de voz y voto.

Por su parte, la Ley 83 de igual fecha, “De la Fiscalía General de la República”, faculta al Fiscal a realizar inspecciones con el fin de comprobar el cumplimiento de la legalidad en los establecimientos penitenciarios, centros de reclusión de asegurados, centros correccionales, lugares en que se cumple la prisión provisional y cualquier otro centro de reclusión, internamien-

to o detención, velando por la protección de los derechos de los detenidos, acusados, sancionados y asegurados, y para ello se han ido atemperando las regulaciones que norman el trabajo de la Dirección de Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios, a los requerimientos actuales de la Fiscalía General de la República.

El Código Penal cubano establece que la sanción no tiene solo por finalidad la de reprimir por el delito cometido, sino también la de reeducar a los sancionados en los principios de actitud honesta hacia el trabajo, de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de convivencia socialista, así como prevenir la comisión de nuevos delitos, tanto por los propios sancionados como por otras personas.

El tribunal fija la medida de la sanción, dentro de los límites establecidos por la ley, guiándose por la conciencia jurídica socialista y teniendo en cuenta, especialmente, el grado de peligro social del hecho, las circunstancias concurrentes en el mismo, tanto atenuantes como agravantes, y los móviles del inculcado, así como sus antecedentes, sus características individuales, su comportamiento con posterioridad a la ejecución del delito y sus posibilidades de enmienda.

Pretendemos como objetivo en nuestro trabajo, abordar el sustento teórico y práctico de las figuras del Juez de Ejecución y del Fiscal en la ejecución

penal, para que se logre una mejor comprensión de su misión social y de su importancia.

Veremos que el Juez de Ejecución actúa en la comunidad de residencia y el Fiscal realiza el control de la ejecución penal en los establecimientos penitenciarios, lo que es objeto de estudio para su perfeccionamiento.

### **EL JUEZ DE EJECUCIÓN Y EL CONTROL, INFLUENCIA Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE CUMPLEN SANCIONES SUBSIDIARIAS O SUSTITUTIVAS DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD O RECIBEN BENEFICIOS DE EXCARCELACIÓN, EN LA COMUNIDAD.**

A partir del año 2001, en cada Tribunal Municipal Popular fueron designados uno o varios jueces profesionales, cuya labor fundamental consiste en coordinar y controlar en la demarcación territorial correspondiente, el debido cumplimiento de las sanciones no detentivas. De esta forma surgió la figura jurídica del Juez Controlador de la Ejecución, en aras de otorgar mayor efectividad al cumplimiento de las sanciones subsidiarias de la privativa de libertad, la remisión condicional de la sanción y las medidas de seguridad, así como el control de los beneficios de excarcelación, quedando regulada su labor en normas complementarias, las que establecen el seguimiento al sancionado, beneficiado o asegurado en torno al efectivo cumplimiento de las obligaciones inherentes a su situación legal, misión que se encamina al máximo cumplimiento de los fines de la pena como factor socialmente esperado ante la determinación de una sanción como tutela penológica, consecuencia obligatoria que se deriva de la comisión de un acto delictivo. Siendo una labor de extrema sensibilidad, apegada a los principios generales del derecho y a las normativas del procedimiento penal, por lo que debe considerarse una obra científica, legal y popular.

Al mencionado Juez de Ejecución lo auxilia otra figura en el entorno judicial denominada Asistente Judicial, cuyo contenido laboral se encamina a la perfección de las relaciones de coordinación e interacción del Tribunal con todos los factores de la comunidad, los que guardan relación con el entorno del sancionado, también asiste en sus funciones al juez profesional encargado del control de la ejecución, al ser el ente que permite la retroalimentación al realizar las comprobaciones y verificaciones de la conducta mantenida por los sujetos a controlar, dando cuenta oportuna al Juez de Ejecución para la toma de decisiones, siendo de vital importancia para el desenvolvimiento de la actividad.

Son objeto de control por parte de los Jueces de Ejecución y de los Asistentes Judiciales, los sancionados a trabajo correccional sin internamiento, limitación de libertad y privación de libertad remitida condicionalmente; También controlan a los beneficiados con la libertad condicional, la suspensión del trabajo

correcional con internamiento y la licencia extrapenal. De igual forma controlan a los sujetos a las medidas de seguridad predelictivas de entrega a un colectivo de trabajo, y bajo la vigilancia de los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria. Asimismo controlan a los que se les haya sustituido la sanción originalmente impuesta de privación de libertad por la de trabajo correcional sin internamiento o limitación de libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 30, apartado 13 del Código Penal, y por último controlan otros casos que expresamente determine la Ley o el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

El tribunal le impone a las personas controladas por la sanción de Trabajo Correcional sin Internamiento la obligación de poner de manifiesto, con una buena actitud en el centro de trabajo donde se ubique, que ha comprendido los objetivos que se persiguen con la sanción, subvenir a las necesidades de su familia y satisfacer las responsabilidades civiles declaradas en la sentencia, así como otras obligaciones legalmente establecidas. Cuando se trata de la Limitación de Libertad el sancionado no puede cambiar de residencia sin autorización del tribunal, no tiene derecho a ascensos ni a aumentos de salario, está obligado a comparecer ante el tribunal cuantas veces sea llamado a ofrecer explicaciones sobre su conducta durante la ejecución de la sanción y debe observar una acti-

tud honesta hacia el trabajo, de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de convivencia socialista.

El Código Penal prevé la revocación del beneficio, sanción sustitutiva o sanción subsidiaria y disponer el cumplimiento de la sanción privativa de libertad originalmente fijada, después de deducir de la misma el tiempo cumplido de aquella. Puede también el tribunal modificar la medida de seguridad por una de mayor o menor rigor, tipo y/o extensión, reducir el período de prueba de la remisión condicional, o modificar los deberes que se establecieron, por lo que cuando el Juez a cargo vaya a considerar si existen razones suficientes para solicitar la revocación, podrá convocar a una audiencia al respecto para escuchar el parecer de todos o algunos de los representantes de los órganos, organismos, organizaciones, instituciones o entidades implicadas.

En los casos de la revocación del beneficio, el Juez de Ejecución remite sin dilación los antecedentes del caso al tribunal juzgador para que por éste se decida conforme a lo solicitado, dentro del término de 3 días a partir del recibo de la solicitud, lo que se notificará al sancionado por si considera establecer recurso de súplica. De resultar incuestionablemente aconsejable, el Tribunal a cargo de la ejecución podrá ordenar la detención cautelar del controlado hasta tanto se decida la cuestión. De todo lo anterior se librárá testimonio al Juez de Ejecución correspondiente.

La figura del Juez de Ejecución, está relacionada con la ejecución de los fallos en materia penal, en directa relación con el articulado de la Ley de trámites penales en torno a la ejecución de sentencias, al citar que tales resoluciones judiciales una vez firmes corresponden al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia. La normativa sustantiva define varios tipos de sanciones penales, medidas de seguridad y beneficios de excarcelación condicionada, que los sancionados deben cumplir en libertad, pero sujetos a ciertas limitaciones y obligaciones, bajo el control, la vigilancia y la influencia de diferentes órganos, organizaciones y entidades que, por mandato de la Ley, deben propiciar la adecuada reeducación y reinserción social de las personas sujetas a esos regímenes sociales.

Con anterioridad al año 2001, este control de las sanciones no detentivas y beneficios, se materializaba en la práctica con la simple firma de las personas indicadas en el escenario de la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, con la carencia de la intervención de los diferentes factores de la comunidad o del centro de trabajo donde laboraban los sujetos a controlar, demostrándose con el transcurso del tiempo lo contraproducente de dicho control, lo que tributó a una nueva evaluación del tópico, determinándose la puesta en vigor de nuevas disposiciones que se encaminaron, en sentido general, a eliminar las insuficiencias del control que le antecedió, el que estaba



un tanto distanciado de los efectos punitivos, preventivos y educativos concebidos para las situaciones legales descriptas.

A partir de esa fecha, la máxima responsabilidad recayó en un juez profesional, debido a su dominio de los conocimientos jurídicos y a la importancia de los actos que debe acometer, en estricta relación con las normativas citadas para la ejecución de las sanciones no privativas de libertad, como son la comparecencia o entrevista que se le realiza al sancionado con el objetivo de conocer su desarrollo social, moral e intelectual y las posibilidades y proyecciones para su reeducación.

El Juez de Ejecución también realiza la presentación del controlado en el lugar de residencia y en el centro de trabajo donde fue ubicado o escogió el sancionado, que permiten conocer su medio familiar y laboral para completar la visión que se tenía del momento de la comparecencia, así como hacer factible un plan de control adecuado y efectivo. Para estas acciones se requiere de la participación de los representantes designados por cada municipio, de la Policía Nacional Revolucionaria, la Dirección de Trabajo y Seguridad Social con sus trabajadores sociales, la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos, las organizaciones de vecinos, de mujeres y de campesinos, si se tratare de zona rural, además de las organizaciones de estudiantes, de jóvenes y otros factores de la comunidad. Participan también los adminis-

tradores de centros laborales o los empleadores, si se tratare del trabajo no estatal.

La ejecución de sanciones no detentivas con los beneficios señalados, se define como una actividad popular al ser inequívoca su inserción en el lugar de residencia y en el centro de trabajo donde se desarrolla el individuo bajo control, que se hace factible con la designación de los representantes de cada uno de los órganos, organismos, organizaciones y entidades con incidencia en una célula más estrecha que el municipio, como lo son los Consejos Populares, que tiene una demarcación territorial más pequeña e incluso la designación de jueces legos que lleguen más directa y efectivamente hasta el barrio, la familia y el centro de trabajo del sancionado, o sea todo lo que comprende su radio de acción, los que actúan como activistas y asistentes del Juez de Ejecución.

De esta forma la actividad en cuestión se inclina más a la arista preventivo-reeducativa, siendo esta la parte más noble, al entenderse como la obligación de la sociedad en su conjunto, de contrarrestar las influencias negativas en el orden conductual que se manifiestan, encaminándose a la evitación de conductas desviadas, antisociales y delictivas mediante la eliminación efectiva de las causas y condiciones que las gestan, siendo una de estas la marginalidad en la que se encontraban muchas de estas personas que volvían a delinquir por la carencia de un tratamiento adecuado, por la falta de ofertas de trabajo, de profilaxis encaminada a la aceptación del sancionado por la comunidad e incluso por el rechazo de los familiares, situaciones que experimentaron un cambio de carácter positivo con el surgimiento de esta figura jurídica del Juez de Ejecución.

Antes del año 2011 se producían situaciones desfavorables para los sancionados, que se extendían hasta la revocación de la sanción, ya que había carencia de elementos, sobre todo cuando se trataba de los incumplimientos de las obligaciones inherentes a su situación legal. En la actualidad tal decisión tiene que estar precedida del criterio de todos los miembros de las organizaciones e instituciones que se relacionan con el sancionado, lo que se colige con el Juez de Ejecución, quien extiende su parecer al tribunal sancionador cuando se presenta la solicitud de revocación, lo que permite mayor calidad y transparencia, evidenciando otra garantía dentro del proceso de ejecución, la decisión que adopte el tribunal sancionador con relación a la solicitud le será comunicada de inmediato al controlado y al juez encargado del control de la ejecución.

Como otras de las funciones del Juez de Ejecución y del Asistente Judicial, está la de velar porque los sancionados bajo su control cumplan las sanciones accesorias y otras obligaciones que les hayan sido impuestas en la sentencia, incluyendo la correspondiente a la responsabilidad civil derivada del delito cometido, y se encaminan a puntualizar que existe este adeudo

e insta al sancionado para que se preocupe por su satisfacción. Además el Juez ejecuta las liquidaciones de sanciones específicas como trabajo correctivo sin internamiento y la entrega a un colectivo obrero como medida de seguridad, las que dependen del tiempo efectivamente trabajado y puntualmente de la fecha en que se materializa la incorporación del mismo al centro de labor. La documentación se remite con todas las formalidades a los tribunales sancionadores correspondientes, lo que permite eliminar la impunidad que como factor de riesgo se evidenciaba.

Esta experiencia de las acciones del Juez de Ejecución se vio limitada en sus inicios por los prejuicios que mantenían los directivos de los centros laborales de incorporar a sus plantillas a sancionados o excarcelados, al considerar que podían desviar al resto de los trabajadores convirtiéndose en un problema para ellos, aspecto sobre el que se ha venido trabajando hasta redimir esta situación a partir del papel resocializador del trabajo, como fuente lícita de obtener ingresos económicos, garantía que de manera arbitraria se le venía negando, observándose en la actualidad el cambio de mentalidad, ya que son los directivos los que muestran interés en las actividades del control de la ejecución, al participar en las reuniones con los sancionados, brindar informes periódicos al Juez de Ejecución, trasladar sus preocupaciones por problemas personales pre-

sentados por los mismos y de su superación profesional, lo que está en correspondencia con los Programas de la Revolución, encaminados a la igualdad y el desarrollo del ser social.

En estos momentos en que nuestro país se encuentra luchando contra el delito y las ilegalidades como flagelos que tienden a debilitar el proceso revolucionario, es de vital importancia el trabajo que se desarrolla por el Juez de Ejecución y todos los factores que intervienen en esta tarea, controlando efectivamente al potencial delictivo en aras de que cumplan los mandatos judiciales en el propio sentido en que han sido dispuestos, evitando acciones fraudulentas en torno a la ubicación del centro de trabajo y su permanencia, la pertinencia de su desempeño laboral vinculado a la sanción dispuesta y al delito cometido, así como las ilegalidades asociadas al domicilio legal o lugar de residencia del sancionado.

La labor del Juez de Ejecución no está exenta de señalamientos susceptibles de análisis encaminados a su erradicación, como la perfección de las actuaciones, la calidad de las reuniones mensuales, el estrechamiento de las relaciones de coordinación, la agilidad del movimiento de la documentación entre el tribunal sancionador y el Juez de Ejecución; pero son significativos los logros en el orden cualitativo, pudiéndose destacar en este sentido la valoración individual que puede alcanzar el Juez de Ejecución del personal bajo su control, la inserción de los factores de la comunidad con sentido de pertenencia al ver como suya la trayectoria del sancionado y su evolución, la respuesta de los sancionados para con el control, la que se traduce en la mayoría de los casos en preocupación, respeto, reflexión ante los señalamientos, interés por cumplir la sanción e insertarse nuevamente en la sociedad, preocupación de los familiares y confianza en el empeño de los órganos, organismos, organizaciones y entidades, implicados en el control.

La misión social del Juez de Ejecución se encamina al rescate del hombre y de sus valores y no a su devolución o ingreso al centro penitenciario donde se hace más riesgosa y difícil su reeducación, por lo que en este sentido han sido de valor inestimable los Consejos de Moralidad y Ética, surgidos en el escenario del trabajo de prevención y atención social, con el propósito de atender conductas antisociales y asociadas a la prostitución, siendo reevaluadas sus aristas de funcionamiento y extendidas a otras situaciones legales, lo que experimentó saldos positivos, al realizarse en los mismos más que un requerimiento a los infractores, un juicio de valor en cuanto a la conducta que debe mantenerse en observancia a las exigencias sociales.

Cuando los sancionados cumplen las obligaciones impuestas, el tribunal, al transcurrir su término, declara extinguida la sanción y lo comunica al Ministerio de Justicia a los efectos de que por éste se cancele en el Registro Central de Sancionados, el antecedente penal proveniente de dicha sanción.

## EL FISCAL Y EL CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN PENAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

Luego del triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959, se acometió un proceso de construcción de un nuevo sistema penitenciario que pone al desnudo las burdas campañas de propaganda anticubana. Dicho proceso está sustentado en el perfeccionamiento constante de la legislación penitenciaria, en correspondencia con los principios consagrados en la Constitución de la República, el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta además, las directrices de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento a los Reclusos.

Ello nos permite aseverar que la experiencia cubana ha evolucionado en dimensiones cualitativa y cuantitativamente superiores como expresión de la Batalla de Ideas que libra nuestro pueblo y específicamente, la batalla por la masificación de la educación y de la cultura en las prisiones, sobre la base de la premisa de quien es el iniciador de esta estrategia, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico del proceso revolucionario cubano de “Convertir las prisiones en escuelas”.

El paradigma fundamental de los fiscales cubanos en el control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios, ha sido el respeto a la dignidad humana y a los ins-

trumentos internacionales, y si lo hemos logrado, obedece en buena medida a la voluntad política de nuestros gobernantes. En tal sentido el compañero Fidel, expresó:

*“El estado socialista no puede sentirse ajeno al destino de ningún hombre, si un hombre está en prisión por las causas que sean, e incluso conspire contra la revolución, la revolución tiene que tratar, por todos los medios posibles de hacer ese hombre útil de alguna manera, para que pueda trabajar y vivir de una manera decente”.*

Lo más importante fue el hecho mismo del cambio conceptual que se operó acerca del sistema penitenciario y su lugar en la sociedad, de manera que las prisiones se transforman, de almacenes de presos, en lugares con las condiciones mínimas indispensables en las que el interno pueda contar con el respeto a su dignidad y se multipliquen las oportunidades reales de desarrollo del ser humano.

Los establecimientos penitenciarios en Cuba forman parte de un sistema regido por un conjunto de normas de obligatorio cumplimiento para la administración penitenciaria, para los tribunales y para los fiscales, las que se aplican de una manera imparcial.

Los principios rectores de la política penitenciaria en Cuba son:

1. El Humanismo Socialista.
2. El pensamiento político de nuestros principales dirigentes.
3. El respeto a la legalidad socialista.
4. La corregibilidad de la persona que ha delinquido.
5. La responsabilidad de la sociedad y el Estado en la atención a los internos.

La ejecución de las sanciones y medidas de seguridad reeducativas de internamiento, tienen como fin no solo reprimir la conducta o delito cometido, sino corregir y reeducar a los asegurados y sancionados en un espíritu de actitud correcta hacia el trabajo, de observancia de las leyes y de respeto a las normas de convivencia social.

El Sistema Penitenciario comprende la aplicación de un régimen progresivo como método para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad, dirigido a estimular la conducta positiva observada por los internos, mediante la disminución gradual del rigor penitenciario como base para la posterior concesión de la libertad condicional o suspensión de la medida impuesta que asegure un adecuado proceso de reinserción social.

En Cuba, es la Fiscalía General de la República la que ejerce el control de la legalidad sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de lo que establece la Ley y demás disposiciones legales.



Por ello en todas las instancias de la fiscalía existen fiscales facultados para realizar inspecciones con el fin de comprobar el cumplimiento de la legalidad en cualquier centro de reclusión, internamiento o detención. De esta forma se garantiza que, el respeto a los derechos individuales de los internos y en particular la legalidad de la ejecución de las sanciones, esté asegurada por el control ejercido por una autoridad judicial o cualquier otra autoridad legalmente habilitada que no pertenezca a la Administración Penitenciaria.

Todo esto se traduce en el hecho de que en nuestro país la ejecución de las penas privativas de libertad no sea una acción exclusiva de la administración penitenciaria, sino sujeta al control de la Fiscalía, concebido como un reforzamiento de la garantía ejecutiva y para la observancia del respeto debido a los derechos e intereses legítimos de los internos.

Para ello se utilizan dos vías fundamentales, una directa a través de las propias visitas de los fiscales a los establecimientos penitenciarios y a los locales de detención y otra indirecta, consistente en la tramitación de la queja o reclamación de la propia persona o por intermedio de una tercera, a la que se le exigen los requisitos formales mínimos.

Si como resultado de estas inspecciones se detectan infracciones, el Fiscal emite una Resolución para que se restablezca la legalidad quebrantada. Este instrumento jurídico

tiene fuerza vinculante, o sea será de obligatorio cumplimiento por parte del órgano, autoridad o funcionario al cual se dirige, quienes además dispondrán de un plazo de veinte días para informar al Fiscal sobre las medidas adoptadas. Si las violaciones detectadas constituyen presuntos hechos delictivos cometidos por los funcionarios del sistema penitenciario, se informa a la Fiscalía Militar, con el objetivo de que se investiguen y procesen en correspondencia con lo establecido en la Ley de los Delitos Militares.

La percepción de la Fiscalía sobre los avances del sistema penitenciario en Cuba es, que desde el triunfo revolucionario de enero de 1959, se comenzó en un proceso de transformaciones que contribuyeron al mejoramiento de la condición humana a los privados de libertad y desde ese entonces, mucho se ha avanzado en este terrero, pero sin duda alguna, estas transformaciones alcanzaron dimensiones cualitativa y cuantitativamente superiores en el año 2000 como expresión de la Batalla de Ideas librada por nuestro pueblo y específicamente, la batalla por la masificación de la educación y de la cultura en las prisiones.

Hoy existen en los establecimientos penitenciarios 12 programas con ese fin, de los que resaltaremos los más importantes:

**Programa Audiovisual:** Se encuentra implantado desde el año 2001, para ello se dotó a cada centro penitenciario de televisores y equipos de vídeos con fines educativos, organizándose un plan de estudio denominado “Por Nuevos Caminos”, sustentado en cursos de diferentes materias contenidos en el Programa “Universidad para Todos”.

**Proyecto de reincorporación San Francisco de Paula:** En el año 2001 se creó, en San Francisco de Paula, comunidad ubicada en la capital del país, un centro experimental para jóvenes de 16 a 21 años de edad sancionados por primera vez. Se trata de una instalación donde no hay rejas, cordón de seguridad ni funcionarios armados.

Lo más destacado del mismo radica en el sistema de tratamiento educativo aplicado, caracterizado por un alto componente de instrucción escolar y capacitación técnica, con la finalidad de obtener, en una primera etapa, el décimo segundo grado de escolaridad y algún oficio; para luego vincularse a estudios superiores.

En los años posteriores, estos resultados se generalizaron, o sea lo que fue un experimento en el año 2001, se puso en práctica en todo nuestro territorio nacional, pues se crearon centros penitenciarios exclusivos para los jóvenes de hasta 27 años de edad, con el mismo principio anterior.

**Universalización:** Programa de significativa importancia. En la actualidad existen sedes universitarias en los establecimientos penitenciarios, donde se imparten las carreras de licenciatura en cultura física y en estudios socioculturales, lo que ha tenido un avance considerable, no solo por la cantidad de in-

corporados, sino además por la calidad de la enseñanza. La perspectiva es incrementar el número de especialidades

Además hay un grupo importante de internos incorporados a la “Cátedra del Adulto Mayor”, donde reciben tratamiento especializado y desarrollan variadas actividades que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida.

**Programa Educa a tu Hijo:** Se encuentra generalizado en los centros de reclusión de mujeres, al que no solo están incorporadas las madres y sus hijos, sino que se le han ido sumando padres de algunos centros penitenciarios del país, de ahí el salto cualitativo de este programa.

**Tarea Confianza:** Este programa, se incluyó en el año 2006. Se trata de la creación de campamentos de nuevo tipo, con el objetivo de vincular laboralmente a los internos en obras constructivas priorizadas para el país y a la producción de alimentos con adecuada remuneración económica. Están dotados de excelentes condiciones de vida y de trabajo. En algunos de estos centros los internos permanecen en condiciones abiertas. Ello permite ir cerrando paulatinamente los anteriores campamentos existentes y además incrementar considerablemente el número de capacidades productivas, elevando así el porcentaje de internos vinculados laboralmente. (60 %)

Además de los programas mencionados, se han promulgado normas y se ejecutan planes, programas y acciones que

coadyuvan al objetivo de perfeccionar el sistema penitenciario, entre las que mencionaremos:

- En el año 2007 se promulgó el Decreto Ley No. 43 que establece que los sancionados a privación de libertad o a sus sanciones subsidiarias que trabajan fuera o dentro de los establecimientos penitenciarios percibiendo una remuneración económica, tienen derecho a recibir las prestaciones monetarias del Régimen de Seguridad Social en las contingencias de enfermedad y accidente de origen común o de trabajo, maternidad, invalidez y vejez; en caso de muerte la recibirá su familia.
- Así mismo se les considera como tiempo de servicio a los efectos de la jubilación, el que efectivamente han laborado durante el cumplimiento de la sanción penal correspondiente.
- El Sistema Penitenciario cuenta además con un grupo importante de colaboradores de los Ministerios de Educación, Educación Superior, Construcción, Trabajo y Seguridad Social con sus trabajadores sociales, Salud Pública, Cultura, Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación, que al igual que de la Federación de Mujeres Cubanas y las organizaciones estudiantiles y juveniles, contribuyen al mejoramiento del trabajo educativo con los internos. Ello nos permite aseverar que se ha consolidado una política integral que favorece la materialización de los objetivos propuestos.
- Es importante señalar que el Sistema Penitenciario ha ido transitando por la puesta en práctica de disposiciones normativas, que entre otras cosas conduce a una disminución de los reclusos en las prisiones cerradas y a que no se produzca el hacinamiento, a lo que contribuye además la política criminal trazada dirigida a estimular el incremento del uso de las sanciones alternativas a la privación de libertad para aquellos infractores de delitos cuyo marco sancionador no excede los 5 años de privación de libertad.
- Se realizan acciones de coordinación y conciliación de manera mensual en todas las instancias del país (municipio, provincia y nación), en las que participan todos los operadores del Sistema Penal para analizar la situación individual de todos los casos de acusados en prisión provisional en aras de lograr la celeridad del proceso penal, lo que nos ha permitido alcanzar bajos índices de acusados sujetos a la medida cautelar de prisión provisional.
- Con el objetivo de contribuir a la preparación de las fuerzas del sistema penitenciario, se ha diseñado un sistema de formación y preparación, que consta de dos dimensiones fundamentales:
  1. Formación y preparación en escuelas, tanto para la formación de profesionales en perfiles de psicología, jurídico y sociología, como para la formación de personal técnico en

las escuelas básicas del sistema de establecimientos penitenciarios, en cursos para funcionarios de orden interior, de administración penitenciaria y otros.

2. Cursos en las propias unidades penitenciarias para fortalecer la preparación moral y de valores éticos, educacional especializada y de preparación física.

Por todas esas razones es que podemos afirmar que han existido avances en el Sistema Penitenciario en nuestro país, visto desde la perspectiva de los cinco problemas principales identificados por el programa RWI/ILANUD en el año 2005.

No obstante estos significativos avances los fiscales al realizar las visitas de inspección a los centros penitenciarios advierten deficiencias e insuficiencias en las que influyen razones objetivas y subjetivas, pero siempre encontramos en la dirección de los centros penitenciarios la receptividad e intención de resolver los señalamientos realizados.

Desde nuestra perspectiva podemos identificar como principal problema del sistema penitenciario las dificultades con el mantenimiento constructivo de las instalaciones, en lo que ha incidido las consecuencias del recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a nuestro país por el gobierno de los Estados Unidos de América desde hace más de 50 años, lo que se agravó por el paso de fenómenos atmosféricos por

nuestro archipiélago.

Entre las acciones estratégicas que se emprenden para su solución está la ejecución de un presupuesto incluido en el plan de inversiones del país, destinado a recuperar las capacidades afectadas. Con iguales objetivos, han sido impermeabilizadas un buen número de cubiertas, reparados cordones de seguridad, pabellones conyugales, áreas de visitas, aulas y puestos médicos.

Como práctica exitosa que puede ser compartida con nuestros colegas, se mencionan las siguientes:

1. El sistema de tratamiento educativo a la población penal, que aunque nació hace más de cuatro décadas, se perfecciona cada día.
2. La promulgación de disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo Popular, con el fin de cumplir con la política de empleo del Estado cubano, dirigida a incorporar al trabajo socialmente útil a las personas aptas y en disposición de hacerlo. Dichas disposiciones regulan el procedimiento para la incorporación laboral de los egresados de los establecimientos penitenciarios, así como las personas sujetas a sanciones subsidiarias de la privación de libertad, remisión condicional de la sanción y medidas de seguridad.  
En tal sentido, las Direcciones de Trabajo, los Órganos Provinciales de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior y los Tribunales Provinciales Populares, establecen relaciones de coordinación en la planificación, información y comunicación oportuna para garantizar la incorporación al trabajo de estas personas y evitar así la estigmatización de los que fueron sancionados.
3. Otra experiencia novedosa es la relacionada con los servicios que ofrece la seguridad social, instrumentada a partir del año 2007.

La experiencia cubana en el perfeccionamiento del Sistema Penitenciario evoluciona con la voluntad de perfeccionarlo y con la convicción de superar las deficiencias bajo el principio de reforzar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

También queremos compartir los principios y derechos de los privados de libertad en el contexto de los derechos humanos, que se encuentran entre las principales características del sistema penitenciario cubano, que seguidamente se citan:

1. Las normativas existentes son de obligatorio cumplimiento y se aplican de una manera imparcial, sin hacer distinción de raza, color, sexo, origen, nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Su incumplimiento está proscrito y es sancionado por la Ley.



2. Para el control sistemático de la población penal, se establece la obtención periódica de informaciones estadísticas, a través de los medios automatizados, por lo que no existe la posibilidad de que permanezcan en nuestras prisiones presos “olvidados” por la autoridad a cuya disposición se encuentran.
3. El Sistema Penitenciario comprende la aplicación de un régimen progresivo como método para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad, dirigido a estimular la conducta positiva observada por los reclusos, mediante la disminución gradual del rigor penitenciario. Dicho enfoque progresivo le permite a la población penal, obtener una rebaja de sanción de hasta dos meses cada año natural por buena conducta, la transición desde los regímenes de mayor severidad a los de menor, la modificación de sanciones privativas de libertad y la libertad condicional, asegurándose así su adecuado proceso de reinserción social. De hecho más del 80% de los reclusos que egresan, lo hacen sin cumplir totalmente su sanción.
4. El establecimiento de criterios de clasificación de la población penal asegura un mejor tratamiento colectivo e individualizado (reglamentación del tratamiento que reciben las categorías de internos a partir de su situación legal, del sexo, las edades, características personales, sus niveles de peligrosidad, etcétera).
5. Se construyen locales adecuados (celdas colectivas e individuales, con aire, luz, ventilación, servicios sanitarios y duchas).
6. El trabajo constituye uno de los eslabones primordiales de la cadena de actividades dirigidas a la rehabilitación de los internos para su plena reinserción social. No tiene un carácter aflictivo ni punitivo. La incorporación a la actividad laboral es voluntaria y reciben remuneración salarial con arreglo a la legislación y las regulaciones vigentes en el país para cualquier otro ciudadano.
7. El sistema penitenciario, (previa solicitud de las familias, de los trabajadores sociales o de los propios reclusos), promueve la concepción de ayudas económicas a los familiares de los internos que así lo requieran, lo que se garantiza por el sistema de seguridad y asistencia social del país.
8. La organización de un subsistema educacional en los establecimientos penitenciarios para la enseñanza general y capacitación técnica en oficios, de manera gratuita. Se les garantiza además los estudios superiores en función fundamentalmente de las capacidades de cada interno, de hecho, en virtud del programa de la **Universalización** de la enseñanza.
9. La organización de un subsistema de atención médica y estomatológica, primaria y especializada para atender a los internos. Se dispone de un médico por cada 200 internos, un estomatólogo por cada 900 para la atención preventiva, y asistencial y especializada, y una enfermera por cada 100, sustentados en una red que incluye hospitales, puestos y postas médicas, áreas reservadas en hospitales del sistema de salud pública y equipamiento, instrumental y abastecimiento indispensable de medicamentos.
10. Las internas son ubicadas en centros penitenciarios exclusivos para mujeres, que son atendidos directamente por el personal femenino debidamente preparado. En dichos centros se encuentra generalizado el programa **Educa a tu Hijo**, al que no solo están incorporadas las madres y sus hijos, sino que se le han ido sumando padres de algunos centros penitenciarios del país.
11. Las internas embarazadas reciben atención médica durante el embarazo, al igual que todas las mujeres del país que son captadas por su médico de familia, y son trasladadas a salas especiales para su cuidado. El parto es atendido por personal médico y ocurre en condiciones intrahospitalarias. Les corresponde también una dieta alimentaria reforzada durante el embarazo y hasta el cumplimiento del primer año de vida del niño o niña, período en el que la interna per-

- manece junto a su hijo o hija, garantizándole la lactancia. Transcurrido este plazo de tiempo, pueden entregarlo a sus familiares o internarlo en un Círculo Infantil libre de costo, donde reciben cuidados excepcionales.
12. Los internos mantienen la comunicación sistemática con sus familiares, mediante visitas, el uso de pabellones conyugales (beneficio que se extiende a reclusos de ambos sexos), contactos telefónicos y correspondencia. Los sancionados pueden, asimismo, ser beneficiados con pases o visitas especiales al hogar sin custodia. Tienen el derecho a ser conducidos o autorizados, según corresponda, en casos de enfermedad grave o muerte de familiares allegados.
  13. El desarrollo de actividades de amplia participación en las esferas artísticas, deportivas y recreativas. Se realizan visitas demostrativas bajo custodia a centros culturales, deportivos, históricos y económicos. Se propicia también el disfrute de los internos de los medios masivos de difusión. Los internos tienen además la oportunidad de compartir con personalidades destacadas del arte, la cultura y el deporte que visitan los centros penitenciarios.
  14. La capacitación técnica y profesional y la superación del personal penitenciario es permanente, tanto en escuelas como en sus puestos de trabajo y se les garantiza la seguridad y estabilidad en su empleo.
  15. Los internos reciben, una alimentación adecuada, con un valor nutritivo no inferior a las 2 400 Kilocalorías diarias y consumen agua potable. Pueden, además, recibir de sus familiares hasta 40 libras de alimentos y otros enseres de primera necesidad en cada visita. Los internos enfermos, en virtud de prescripción facultativa, reciben una dieta alimentaria en correspondencia a su padecimiento. Todo interno recibe gratuitamente los artículos de aseo personal, lencería y uniforme.  
Los internos jóvenes también reciben un tratamiento diferenciado. Se les ubican en establecimientos penitenciarios solo para jóvenes o en áreas separadas de las prisiones de adultos y son atendidos por personal seleccionado. Lo más destacado del mismo radica en el sistema de tratamiento educativo aplicado, caracterizado por un alto componente de instrucción escolar y capacitación técnica con la finalidad de obtener, en una primera etapa, el décimo segundo grado de escolaridad y algún oficio; para luego vincularse a estudios superiores, como se señaló anteriormente.
  16. Los internos extranjeros se ubican en centros y áreas de reclusión independientes y se les garantiza la asistencia consular, el respeto a sus tradiciones culturales y se les brindan facilidades para la adquisición de productos alimenticios, de aseo y uso personal de su preferencia.
  17. Los acusados que son asegurados con prisión provisional, se encuentran en centros o áreas independientes al resto de la población penal. En coordinación con los órganos de la fiscalía y los tribunales populares, se promueve como política la aplicación de esta medida solo a los casos indispensables y se trabaja de modo intenso por reducir el plazo de investigación, enjuiciamiento y sentencia al mínimo indispensable para garantizar el respeto estricto de los requerimientos del debido proceso. Está garantizada la asistencia jurídica a estos detenidos, tanto en materia de derecho civil como penal, se facilitan los contactos personales con sus representantes legales, se les presume su inocencia y son tratados en consecuencia.  
Del total de la población penal cubana, solo un pequeño porcentaje, que oscila en un rango entre el 8 y el 10 %, corresponde a detenidos, a los que no se les ha realizado o completado un proceso judicial. Este índice contrasta con las cifras promedios reportadas en otros países, que varían del 50 al 95%, con alguna puntual excepción.
  18. Se garantiza la asistencia religiosa de manera individual y colectiva a aquellos internos que la soliciten y puede ser impartida por representantes de las organizaciones religiosas registradas oficialmente en el país. En los centros de reclusión se facilitan las áreas o locales para la realización de estas actividades y se autoriza a los reclusos a recibir y poseer los textos oficiales de la religión que profesan.
  19. Existe un procedimiento para enfrentar las infracciones a la disciplina en correspondencia con el Reglamento del Sis-

tema Penitenciario. Con tal propósito, se crea un Consejo Disciplinario, que analiza las indisciplinas cometidas por los reclusos y valora colegiadamente la aplicación de la medida disciplinaria, la que será proporcional a la infracción, sin que puedan ser sancionados dos veces por la misma indisciplina. En dicho acto los implicados exponen los argumentos a valorar, tanto a favor como en contra. El interno hallado culpable, tendrá derecho a reclamar ante el Consejo de Dirección del centro penitenciario.

No pueden imponerse medidas disciplinarias que afecten los derechos relacionados con: alimentación, vestuario, asistencia médica y estomatológica, enseñanza general, contacto con su familia, recibir visitas de sus abogados, recibir remuneración económica, etcétera.

20. Las medidas disciplinarias no implican castigos corporales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni la reducción de su alimentación. Se prohíbe que ningún interno ejerza acciones con facultades disciplinarias sobre los restantes reos.
21. Todos los internos, amparados en la Constitución de la República de Cuba, en las leyes y en el Reglamento del Sistema Penitenciario, tienen derecho a dirigir quejas y peticiones de forma verbal o escrita a las autoridades y a recibir la atención o respuesta pertinentes, en un plazo adecuado, conforme a la Ley.

A modo de conclusiones y en este ámbito, es conveniente relacionar algunos de los elementos distintivos de nuestro sistema penitenciario:

Como promedio, un 40% del total de sancionados se encuentran en unidades abiertas, desprovistas de cercas y otros medios de seguridad, sin vestir uniformes de internos y laborando en condiciones similares a las de la población civil. Disfrutan de pases o permisos especiales por buena conducta.

La libertad anticipada puede ser otorgada a la mitad de la sanción para los primarios, término que disminuye hasta un tercio en el caso de los jóvenes y que aumenta a 2 tercios para reincidentes y multi-reincidentes.

En Cuba más del 90% de los internos se encuentran cumpliendo una sentencia firme.

Las sanciones menores de 5 años de privación de libertad pueden ser sustituidas por penas no privativas al tercio del cumplimiento.

A los internos no se les aplican en ningún caso cadenas, grilletes, ni camisas de fuerzas.

La violencia y el maltrato, tanto físico como espiritual, están totalmente prohibidos y constituyen un delito previsto en la Ley, la que impone la obligación de sancionar a cualquier persona que cometa actos de dicha naturaleza en el desempeño de sus funciones en los centros penitenciarios.

Solo se autoriza la fuerza estrictamente indispensable para reducir al orden a aquellos que lo han alterado.

El uso de armas de fuego está prohibido para las fuerzas que actúan al interior de los penales, quedando limitado a los cordones externos de las prisiones cerradas, con serias restricciones para su uso.

Los sancionados pueden ser beneficiados con pases o visitas especiales al hogar sin custodia, como estímulo a la buena conducta. Tienen el derecho a ser conducidos a hospitales o funerales, entierros, en el caso de enfermedad grave o fallecimiento de familiares allegados.

Las visitas se realizan sin mallas, rejas, paredes de vidrio u otro tipo de obstáculo al contacto directo del recluso con sus familiares.

Las dificultades provocadas por el bloqueo genocida al que ha estado sometido nuestro país, han impedido la creación de capacidades suficientes para garantizar la ocupación laboral de toda la población penal. No obstante, se trabaja intensamente para ampliar las posibilidades de empleo para los internos que voluntariamente opten por ese derecho.

Las comisiones de estudios jurídicos en Cuba laboran para perfeccionar las regulaciones vinculadas a la ejecución de las sanciones penales.

No nos embriagan los resultados obtenidos, estamos fundando un mundo diferente, donde la solidaridad, la igualdad, la cultura y la lucha por la justicia social lo caractericen. Un mundo mejor es posible.



# VALORACIÓN CRÍTICA DE LA REGULACIÓN DE LA LEGÍTIMA DEFENSA EN EL CÓDIGO PENAL



**ESP. DIMAS A. HERRERA GANDOL**  
FISCAL ASISTENTE DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## INTRODUCCIÓN

En este trabajo se valora la Legítima Defensa en sus distintas modalidades, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia, considerándose que esta institución jurídica no está correctamente regulada en el Código Penal (CP), proponiendo al efecto las recomendaciones pertinentes.

## CONCEPTO Y FUNDAMENTOS DE LA LEGÍTIMA DEFENSA

Legítima Defensa es la reacción necesaria, proporcional y suficiente, para impedir o repeler una agresión ilegítima, inminente o actual y no provocada, contra la persona o derechos de quien se defiende, de un tercero o contra los bienes e intereses sociales, con cuya reacción se lesiona o se pone en peligro un bien jurídico, si solo de esa forma puede salvarse otro bien de más valor; entendiéndose que entre los bienes jurídicos de quien agrede y quien se defiende, merece protección jurídica los de éste último.

Desde la perturbación de ánimo del defensor (Puffendorff), hasta la salvaguarda del interés preponderante (Jiménez de Asúa), se han hecho varias interpretaciones del derecho de defensa; respecto al cual expresó Montesquieu (1976: 172): “En los casos de defensa propia tengo el derecho natural de dar la muerte, porque mi vida es mía, como la vida del que me ataca es suya; lo mismo hace la guerra de un Estado, porque es justa su conservación como es legítima toda defensa”.

Entre las principales teorías expuestas como fundamento, se encuentran la formulada por la escuela clásica, conforme a la cual, ante la imposibilidad de que el Estado proteja al injustamente atacado es lícito que se defienda y, la de valoración de bienes jurídicos, que plantea que no actúa antijurídicamente el que lesiona o pone en peligro un bien jurídico, si solo por ello puede salvar otro bien de más valor.

Asumiendo una posición ecléctica, la fundamentación de esta eximente puede ubicarse en el permiso concedido por el Estado al individuo para que se defienda de una agresión injusta cuando él no puede hacerlo, exigiéndole, al mismo tiempo, que el bien jurídico salvado sea de mayor valor que el lesionado, sin lo cual no tendría virtud esa autorización; tratándose pues de un derecho otorgado a particulares, sujeto a requisitos especiales, para ejercerlo en determinadas situaciones previamente establecidas.

## ANÁLISIS DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO PENAL

La legítima defensa regulada en el artículo 21 del Código Penal, admite la defensa de la propia persona y sus derechos, del tercero y de bienes e intereses sociales, exigiéndose congruencia entre sus elementos objetivos (agresión ilegítima, necesidad de defensa, proporcionalidad entre el ataque y la defensa) y subjetivos (reconocimiento de la agresión, situación de defensa y finalidad defensiva), siendo preciso que la acción defensiva (resultado valioso), esté impregnada del ánimo de defensa (valor de acción).

**Artículo 21.1.** “Está exento de responsabilidad penal el que obra en legítima defensa de su persona o derechos”: La situación de legítima defensa exige de una conducta que atente contra una persona o sus derechos (la agresión) y una reacción del agredido (la defensa), produciendo la defensa de la vida, la integridad corporal, la libertad, el domicilio, la propiedad y todos los que puedan ser objeto de una agresión ilegítima, pero mientras

no se acrediten los elementos fácticos de la causa de justificación, el hecho será típico y antijurídico. La Sentencia No. 232 del TS de 6 de Septiembre de 1940, expresó, “Toda causa justificación debe quedar plenamente probada, sin necesidad de realizar inferencias o deducciones de las que aquella puedan derivarse”.

**Artículo 21.2.** “Obra en legítima defensa el que impide o repele una agresión ilegítima, inminente o actual y no provocada”: La agresión, gramatical y jurídicamente, es un hecho material de acometimiento, que pone en peligro actual o inminente intereses jurídicos; considerándose ilegítima cuando el acto de fuerza se realiza sin derecho y sin razón; siendo impropia la defensa ante conductas típicas no antijurídicas, el ataque de inimputables y de quien obra por miedo insuperable, por ser actos lícitos o no conscientes y voluntarios. De igual modo, la riña excluye la legítima defensa por ser todos agresores y agredidos.

La legítima defensa puede ser preventiva, si se dirige a impedir una agresión inminente, que amenaza con producirse de modo inconfundible, o represiva, si repele la actual, la que acontece. La

situación de defensa se extiende desde que es apreciada la amenaza inmediata para el bien jurídico, hasta que haya cesado la actividad lesiva o la posibilidad de retrotraer o neutralizar sus efectos. La agresión pasada legitimaría la venganza y la futura salvaguardaría el miedo. El estado de agresión inmediata no puede depender del proceso mental interno de la víctima que se siente en peligro de ataque, difícil de probar, pero tampoco debe supeditarse a su probabilidad matemática, siendo más fácil para su apreciación la agresión actual, por ser la que se está desarrollando.

La provocación es la acción intencional, dirigida por quien después se defiende hacia el futuro agresor, suponiendo una relación de causalidad entre provocación y agresión, debiendo ser la causa adecuada o necesaria de la última, porque si ésta, o su magnitud, no concuerdan con la primera, no puede eliminar el fundamento de la legítima defensa. El provocador, en determinados casos y circunstancias, tiene derecho a defenderse ante una respuesta desproporcionada, porque esa desproporción en el ataque tiene efecto mutilante sobre la provocación que lo origina. Piénsese en un sujeto que ante una ofensa verbal responde disparando un arma de fuego para matar a quien le ofende.

Para Jiménez de Asúa la provocación vicia en su causa la legítima defensa, mientras que Silveira expresó, “Es justo decir que el provocador no puede ser obligado a dejarse matar o condenarlo por haber cometido un delito al defenderse de quien reaccionó ante su provocación” (citado por Hernández de Armas, Nicasio, 1975: 82); refiriendo el TSP en sentencia No. 681 de 15 de mayo de 1974, “Obra en legítima defensa de su vida el acusado que toma una pistola y se dispone a repeler una agresión al ser sorprendido de noche, en convivencia con la esposa y en el domicilio conyugal del que resultó lesionado, cuando éste se introduce súbitamente en el referido domicilio con una pistola en la mano; pues necesariamente se tuvo que representar que era objeto de una agresión mortal contra su vida, lo que no justifica la responsabilidad ética de su conducta reproachable”.

La provocación que invalida la legítima defensa, debe ser la que fundadamente induzca u

obligue a la agresión, según las circunstancias en que se ejecuta y la persona a quien se dirige, infiriéndose que se ha buscado, que está dirigida a ello, considerando más acertada la redacción del Código de Defensa Social (CDS) que expresaba “no provocada ni buscada de propósito”, porque la del CP “y no provocada”, de la forma que se expresa, absolutiza que toda provocación invalida la justificación, sin distinguir, cuando la doctrina y la jurisprudencia afirman lo contrario. Según la sentencia del TS No. 373 de 18 de diciembre de 1941, la agresión solo deja de ser injusta cuando ha sido provocada con el propósito de crear una situación de defensa.

Lo correcto sería “y no provocada intencionalmente”, indicando con exactitud que la provocación que invalida la actuación en legítima defensa es la que tiene el propósito de colocarse en ese estado, de forma directa o eventual, precisando una relación causal entre la provocación y la agresión, para excluir, como sinónimo de provocación los actos no son idóneos o suficientes para desencadenar una determinada agresión, librando al sujeto de soportar la desproporción, pues solo quien intencionalmente provoque la agresión que se produce, debe ser privado de la posibilidad de defenderse legítimamente.

**Artículo 21.2.a.** “Necesidad objetiva de la defensa”: Su apreciación exige la inexistencia de otra vía para conjurar la agresión que no sea mediante el despliegue de la conducta típica, pues la simple suposición de una agresión no permite que la eximente cobre vida, sobre lo cual la sentencia No. 3692 de 9 de diciembre de 1988 del TSP, expuso, “Para ser acreedor de la eximente de legítima defensa no basta que exista una agresión ilegítima y no provocada por el que se defiende, sino que tiene que existir la necesidad objetiva de esa defensa”.

Pero no puede pedirse a los ciudadanos, jurídicamente, huir del enfrentamiento para evitar la agresión, lo que se ha descartado en la jurisprudencia española (sentencias del TS de 3 de abril de 1976, 23 de marzo de 1988 y 30 de octubre de 1990). De la misma forma, la posibilidad eventual de recibir auxilio no es motivo para desestimar la legítima defensa.



Luzón Peña considera que no es posible alegar legítima defensa cuando se reciben los efectos de una tentativa inidónea o delito imposible por cuanto no existe antijuricidad, toda vez que no hay afectación de bienes jurídicos, mientras que otros autores opinan que no puede negársele a la víctima de un delito imposible que se defiende de quien intenta matarlo aunque los medios no sean idóneos.

Imaginemos a un sujeto que se ve frente a su mortal enemigo, el cual, empuñando un arma de fuego sin proyectiles, hace un ademán para dispararle. Es obvio que puede y debe defenderse, no siendo exigible, en esas circunstancias, verificar la idoneidad del medio empleado para la agresión, pero también es cierto que no había necesidad objetiva de defenderse, estando entonces frente a una legítima defensa putativa, la que tendrá amparo legal en la eximente del error, porque éste, ciertamente, era invencible.

**Artículo 21.2.b.** “Proporcionalidad entre la agresión y la defensa, determinada en cada caso con criterios razonables, según las circunstancias de personas, medios, tiempo y lugar”: Se estipula la proporcionalidad entre la agresión y la defensa, no entre medios de ataque y defensa como establecía el CDS, pues son las circunstancias de personas, medios, tiempo y lugar, apreciadas racionalmente, las que determinarán si esa proporcionalidad existe.

El hombre que sufre una agresión inesperada e injusta tiene derecho a defenderse con las armas que disponga, cumpliendo el principio de ponderación de bienes. La desproporción del medio empleado para defenderse implica escoger conscientemente un medio superior al necesario, habiendo disponible otros también eficientes pero menos drásticos. En la sentencia No. 233 de 28 de julio de 1942, el TS explicó, “en la estimación de la racionalidad del medio empleado para repeler y evitar una agresión ilegítima, no hay ni puede haber reglas morales ni jurídicas fijas ni precisas, dada la multiplicidad de casos y la diversidad de las circunstancias que pueden concurrir”.

**Artículo 21.3.** “Está igualmente exento de responsabilidad penal el que defiende a un tercero

en las condiciones y con los requisitos exigidos en el apartado 2, aunque la agresión haya sido provocada, si el defensor no participó en la provocación”: Se exigen los requisitos de la defensa propia, salvo la falta de provocación, admitiendo la posibilidad de que haya existido por parte del defendido, si el defensor no participó en la provocación; con lo que se abandonan aciertos del derogado CDS, restringiéndose además la defensa del tercero a su persona exclusivamente, obviando sus derechos.

No hay dudas en cuanto a la configuración de la eximente cuando se defiende a un tercero objeto de una agresión ilegítima, inminente o actual y no provocada por él, cumpliéndose los requisitos de necesidad objetiva de la defensa y proporcionalidad entre el ataque y la defensa, pues son los mismos que se tienen en cuenta en la legítima defensa propia, con la diferencia que el defensor no es la persona que recibe el ataque. La confusión comienza al autorizarse la defensa de un tercero provocador, vulnerando con ello, o desconociendo, los principios, condiciones, requisitos y fundamentos sobre los que erige esta institución.

Quien provoca una agresión, y ya se ha explicado a que provocación nos referimos, no debe esperar que el derecho ampare su defensa, porque la falta de provocación es una exigencia para la corporificación de la eximente, resultando obvio que la falta del requisito afecta al provocador y al defensor, por recaer sobre elementos fácticos de la causa de justificación, llamando la atención que si el defensor participó o conoció de la provocación no se configura la eximente, pero si desconocía que la persona a quien defiende era el provocador, lo ampara la justificante; de modo que la legalidad de su actuación no es por la concurrencia objetiva de los elementos que apuntalan la institución, sino por la falta de coincidencia entre la realidad de los hechos y su representación, es decir, el desconocimiento de que la agresión había sido provocada; haciendo recaer la causa de justificación sobre el autor, ignorando su carácter objetivo.

Admitir la legítima defensa de un tercero provocador, existiendo relación causal entre la provocación y la agresión, es sin duda alguna

una metáfora jurídica. En todo caso pudiera gravitar sobre el actuante la inculpabilidad por error o la justificación por cumplimiento de un deber, según el caso.

Otro aspecto cuestionable, es el haber eliminado la posibilidad de defender legítimamente otros derechos que no sean los de la persona del tercero, como el CDS, pues nada niega que un derecho, como el de la propiedad, pueda ser objeto de una agresión ilegítima, inminente o actual y no provocada, y exista además necesidad objetiva de su defensa, faltando únicamente el amparo legal para actuar.

**Artículo 21.4.** “Asimismo, obra en legítima defensa el que impide o repele en forma adecuada un peligro o un daño inminente o actual a la paz pública o a los bienes e intereses sociales o del Estado”: Se trata de la defensa de bienes sociales, exigiéndose que la defensa sea la adecuada para impedir o repeler un peligro o un daño inminente o actual, debiendo corresponder la defensa a la entidad del daño o del peligro; considerándose por algunos autores como una innovación del CP; criterio que no comparto, por estimar que la formulación de este precepto es, por un lado, una redundancia jurídica y, por otro, un desacierto técnico, asistiéndole razón a Binding cuando sostenía que la defensa del Estado no era una legítima defensa, sino un ejercicio de derecho autónomo.

En cualquier Estado, el cumplimiento de los deberes fundamentales reviste importancia trascendental. Nuestra Constitución, en su artículo 64, establece que es deber de cada uno cuidar la propiedad pública y social, consagrando en el artículo 65 que la defensa de la Patria Socialista es el más grande honor y deber supremo de cada cubano; concibiéndose como tal la defensa de todos y cada uno de los bienes e intereses sociales regulados en la propia carta magna, lo que supone, desde luego, la defensa contra cualquier ataque que ponga en peligro esos bienes o intereses.

En el artículo 66 se establece que el cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes es deber inexcusable de todos; debiendo entenderse entonces que la defensa de los bienes

o intereses sociales y de la paz pública, es un deber de la colectividad ante conductas que impliquen peligro o daño para ellos; por eso, quien impide o repele en forma adecuada un peligro o un daño inminente o actual a la paz pública o a los bienes o intereses sociales o del Estado, está exento de responsabilidad penal en virtud del cumplimiento de un deber impuesto a cada ciudadano por la ley suprema, pero no por legítima.

Es fácil advertir además que no se exige el requisito de la agresión ilegítima, aludiendo solamente al peligro o daño, inminente o actual, que debe repelerse o impedirse en forma adecuada; lo que convierte este precepto en una copia deformada del estado de necesidad.

**Artículo 21.5.** “Si el que repele la agresión se excede en los límites de la legítima defensa, y, especialmente, si usa un medio de defensa desproporcionado en relación con el peligro suscitado por el ataque, el Tribunal puede rebajar la sanción hasta en dos tercios de su límite mínimo, y si se ha cometido este exceso a causa de la excitación o la emoción violenta provocada por la agresión, puede aun prescindir de imponerle sanción alguna”: No admite dudas la posible rebaja de sanción por exceso en la defensa y desproporcionalidad en el medio, al sustentarse en elementos fácticos; se objeta la inclusión del exceso a causa de excitación o emoción violenta provocada por la agresión, por abandonarse el análisis de requisitos objetivos de la justificante, que actúa sobre el hecho, para analizar la inculpabilidad del autor, como elemento fundamental, lo que pudiera hacerse, en los casos concretos, en base al error, el miedo insuperable, trastorno mental transitorio o facultad sustancialmente disminuida para comprender el alcance de la acción y dirigir la conducta; es decir, por inculpabilidad y por inimputabilidad.

Asimismo, debiera acogerse como modalidad de la legítima defensa incompleta el caso del sujeto que impide o repele una agresión ilegítima que provocó, si la agresión es desproporcionada en relación con la provocación, pues, como se expuso, en muchos casos la provocación no elimina la ilicitud de la agresión.



## PROPUESTA DE FORMULACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO PENAL

De conformidad con los criterios vertidos, la formulación correcta del Artículo 21 del Código Penal debiera ser la que a continuación se expone.

### Artículo 21.1. Está exento de responsabilidad penal el que obra en legítima defensa de su persona o derechos

2. Obra en legítima defensa el que impide o repele una agresión ilegítima, inminente o actual y no provocada intencionalmente, si concurren, además, los requisitos siguientes:
  - a) Necesidad objetiva de la defensa
  - b) Proporcionalidad entre la agresión y la defensa, determinada en cada caso con criterios razonables, según las circunstancias de personas, medios, tiempo y lugar
3. Está igualmente exento de responsabilidad penal el que defiende la persona o los derechos de un tercero en las condiciones y con los requisitos exigidos en el apartado 2.

4. Si el que repele la agresión se excede en los límites de la legítima defensa, y, especialmente, si usa un medio de defensa desproporcionado en relación con el peligro suscitado por el ataque o si, en su caso, la agresión que repele es desproporcionada respecto a la provocación que la causó, el Tribunal puede rebajar la sanción hasta en dos tercios de su límite mínimo o exonerar de responsabilidad cuando las circunstancias del hecho lo justifiquen.

## CONCLUSIONES

Al abordar el estudio de la Legítima Defensa como institución jurídica que justifica la responsabilidad criminal de ciertos hechos típicos, valorando las diversas formas en que se materializa, y efectuar los respectivos cuestionamientos, concluyo que esta eximente, desde el punto de vista técnico-jurídico, no se encuentra correctamente regulada en nuestro Código Penal y que, a pesar de que estos defectos formales no trascienden al ámbito de la política criminal, se hace necesario realizarle las mejoras correspondientes.

## BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez Tabío, Fernando. 1989. *Comentarios a la Constitución Socialista*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba.
- Casasús, Juan J.E. 1950. *Código de Defensa Social y Derecho Penal Complementario*. Segunda Edición, Tomo I. Editorial Molina y Compañía, La Habana, Cuba.
- Código Penal, Ley No. 62 del 29 de diciembre de 1987.
- Cuello Calón, Eugenio. 1982. *Derecho Penal*. Parte Especial, Tomo II, Decimocuarta Edición. Bosch Casa Editorial S.A., Barcelona, España.
- Chirino, Alfredo y Salas, Ricardo. 1993. *La Legítima Defensa. Alcance y Límites Dogmáticos y Jurisprudenciales*. Investigaciones Jurídicas S.A., Costa Rica.
- Hernández de Arma, Nicasio. "Apuntes Para un Estudio de la Legítima Defensa". Revista Cubana de Derecho No. 9, Año IV, Enero-Junio 1975. La Habana, Cuba.
- Jiménez de Asúa, Luis. 1950. *Tratado de Derecho Penal*. Tomo I-II. Edit. Losada S.A., Buenos Aires, Argentina.
- Masa y Rodríguez, Emilio. 1943. *La Legítima Defensa en la Jurisprudencia Cubana*. Primera Edición. Jesús Montero Editor, La Habana, Cuba.
- Montesquieu. 1976. *El Espíritu de las Leyes*. Editorial C. Sociales, La Habana, Cuba.
- Quirós Pérez, Renén. 1999. *Manual de Derecho Penal*. Tomo I. Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba.
- Rusconi, Maximiliano Adolfo. S/A. *La Justificación en el Derecho Penal, Algunos Problemas Actuales*. Editorial AD-HOC S.R.L., Buenos Aires, Argentina.
- Sainz Cantero, José A. 1984. "La Legítima Defensa y el Estado de Necesidad". Revista de Divulgación Jurídica MINJUS No. 1, La Habana, Cuba.
- Zaffaroni, Eugenio Raúl. 1988. *Tratado de Derecho Penal*. Editorial Cárdenas, México.



# LA CONVICCIÓN, un arma imprescindible en la protección de niñas y niños víctimas



LIC. UBELEXIS RONDÓN CANTERO  
FISCAL  
FISCALÍA PROVINCIAL CIENFUEGOS

## INTRODUCCIÓN

En Cuba la protección a la niñez y la juventud tiene carácter prioritario, establecida desde los postulados constitucionales y desdobladas en no pocas normativas incluida la relativa al Derecho Penal. Resulta especialmente interesante la tutela penológica que brinda el Estado para aquellos que vulneran los derechos proclamados por los organismos internacionales y acogidos por varios de nuestros cuerpos legales. No obstante la Justicia se enfrenta a la delicada tarea de emitir un juicio de credibilidad respecto del testimonio de una víctima, muchas veces constituida como la prueba principal.

Para los operadores del Derecho ello implica realizar un esfuerzo en dependencia de la posición que le corresponda en el proceso para alcanzar la convicción y convencimiento objetivo del hecho investigado o juzgado. Para los jueces, el desafío de emitir un juicio de valor debiendo pronunciarse y explicitar circunstanciadamente cada uno de los supuestos fácticos y argumentaciones jurídicas esgrimidos en estrados por las partes resulta una alta responsabilidad a la que el fiscal tiene que contribuir de manera efectiva.

Según la UNICEF (Abril 2002) se calcula que cada año un millón de menores de edad, la mayoría niñas, están en las redes del comercio sexual. A los niños más vulnerables se les traslada dentro y fuera de las fronteras para someterlos a la prostitución, la pornografía y a formas intolerables de trabajo infantil, en Cuba la realidad es diferente.

Con independencia de los esfuerzos, en los últimos tiempos, se aprecia una incidencia nada despreciable de la comisión de delitos de Abusos Lascivos, Corrupción de Menores y Otros Actos Contrarios al Normal Desarrollo del Menor. Ello unido a la constante evaluación de estos temas para lograr un perfeccionamiento en las investigaciones nos ha motivado al análisis del contexto actual, nos llevan a emitir consideraciones al respecto.

## DESARROLLO

El niño víctima de la violencia delictiva forma parte de la problemática del delito y de la violencia en general, así como es parte de la Victimología. No obstante es ineludible que

dentro de estos sectores de la población y cuando se trata de niños, se hiere más la sensibilidad humana de todos los ciudadanos. Aún así se estudia y se conoce más profundamente sobre los victimarios del infante que sobre el propio niño víctima y en ocasiones esto forma parte de un acicate más para hacerlos vulnerables dentro de un determinado proceso.

Defender a los infantes víctimas es una tarea obligada de todos, por lo que no es soberanía exclusiva del Estado; el Doctor Luis Rodríguez Manzanera en su ensayo "Victimología y Derechos Humanos" lo resumió de la siguiente manera: "Sentimos que la atención de los especialistas se ha centrado en los derechos de los delincuentes, olvidando en mucho los de las víctimas" (1996:10).

Entre los actos que la población concibe como los más siniestros, está el de los delitos sexuales, cuyo origen se explica con raíces milenarias y que constituye un fenómeno que no es privativo de algún lugar del mundo, convirtiéndose en un tema de prioridad para análisis e investigación criminológica, y si estos delitos sexuales se realizan contra menores son mucho más repudiados y provocan incalculables consecuencias en el futuro adulto. En Cuba también se valora de forma especial la responsabilidad de la familia en su educación, formación y cuidado.

Para la sistemática de la normativa patria es considerado menor al sujeto con edad de 15 años o menos, es decir, inferior a la mayoría de edad penal de 16 años. Lo anterior está ligado evidentemente a patrones relacionados con el desarrollo físico, intelectual y emocional que requieren edades específicas apropiadas para definir al niño.

Por su parte la *víctima* podemos considerarla desde el punto de vista gramatical como el ser destinado al sacrificio personal que se expone a un grave riesgo en obsequio de otra, padecer por culpa ajena o por causa fortuita (Diccionario ARISTOS, 1985:16). Para la Victimología, víctima es todo aquel sujeto que sufre por la comisión de una conducta antisocial aunque no sea detentador del derecho vulnerado. El más universal y aceptado de todos los concep-

tos de víctimas que conocemos, y que es sustentado por la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (año 1985-1989), es:

"Se entenderá por víctima las personas que individual o colectivamente hayan recibido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas financieras o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones y omisiones que violan la legislación penal vigente en los estados miembros, incluido lo que prescribe el abuso de poder" (Instrumentos Jurídicos Para la Infancia, 1996: 23)

Podrá considerarse víctima a una persona, independientemente a que se identifique, aprehenda en juicio o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima.

En la expresión Víctima se incluye, además, en su caso, a las familias o personas a su cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

Así, en materia penal es considerada víctima a toda persona que ha sufrido daño físico, psíquico, financiero o de sus derechos como persona a consecuencia de una acción u omisión regida en Ley como delito. Bajo ese concepto debemos considerar a la víctima en su rol con el derecho penal, tanto sustantivo como adjetivo.

Las formas clínicas del maltrato son muy variadas, existiendo el maltrato físico, el cual tiene múltiples formas de presentación que incluyen: la golpiza, quemadura, heridas por armas blancas, sofocación, abuso sexual cada una con sus rasgos distintivos. Es importante, sobre todo, considerar que una conducta es abusiva cuando es vivida y sentida de este modo por el niño o la niña, cuando miran, tocan, o cuando son mirados o tocados de un modo que les daña.

Durante los últimos años ha existido una significativa ocurrencia de ellos que tienen como blanco niñas y niños, lo que obliga a un análisis de todo lo relacionado con ello, tanto desde el punto de vista criminológico, como preventivo

o investigativo. Para la Fiscalía la protección de la infancia constituye una prioridad.

Para quienes investigan la comisión de actos delictivos y entre ellos aquellos en los que resultan víctima los infantes, la indagación implica realizar un esfuerzo de convicción y convencimiento antes los tribunales. Por su parte, a los magistrados corresponde el desafío de emitir un juicio de valor debiendo pronunciarse y explicitar circunstanciadamente cada uno de los supuestos fácticos y argumentaciones jurídicas esgrimidos en estrados por las partes. Hoy se fortalecen los esfuerzos por lograr resultados más locuaces con intervenciones mínimas, sin embargo no siempre se reciben o interpretan adecuadamente, en nuestro criterio.

La investigación y tratamiento penal a eventos en los que resultan victimizados niños suelen ser especialmente complejos, la posibilidad de los menores de describir el propio hecho en el que fueron victimizados es a veces cuestionada, a la vez que en muchos casos, paradójicamente, no se cuenta sino con su testimonio como pieza fundamental para intentar demostrar su ocurrencia, como sucede con frecuencia en los casos de los delitos sexuales.

Para los jueces resulta que el juicio de valor incide directamente en la evaluación que realizan respecto de la víctima y su contexto e historia personal: ¿dice la verdad un menor cuando relata haber sido víctima de tocaciones?, ¿pudo haber sido objeto de influencias para denunciar?, ¿porqué denunció ahora y no antes?, ¿se observa un menor afectado psicológicamente por los hechos que resalta?, etc. Las respuestas no son sencillas, no basta el análisis racional, la pasión o el sentido común si uno de ellos excluye al otro, pero se requiere para ello de sapiencia, confianza y de un adecuado argumento investigativo. Corresponde al fiscal convertirse en el sostén que requiere el niño para ser escuchado y protegido ante un hecho vivido con toda certeza.

Desde finales del siglo pasado autores que dedicaron su obra al estudio de la Psiquiatría y la Psicología Judicial incluyeron en los mismos aspectos relativos a la peritación de la víctima. En los últimos años toma auge en el estudio de las causas y condiciones que determinan

el delito como fenómeno social, el análisis de los factores victimales. En este contexto hay un punto en que se acentúa aún más esta semiexclusión bibliográfica, el referido al testimonio de los niños víctimas de delitos (Evaluación Pericial Psicológica de Credibilidad de Testimonio, 2008).

El testimonio no es más que la huella de un hecho que aunque subjetivamente, puede resultar útil para establecer las características esenciales del fenómeno, en este caso hecho delictivo, que lo determinó y que a la vez se refleja en él. La experiencia indica que la prueba pericial que analiza el testimonio de la víctima es un aporte fundamental a la decisión del juez en la medida que provee elementos de convicción que pueden servir de base al pronunciamiento de una sentencia, especialmente en cualquier delito que trascurra con pocos elementos criminalísticos de otro carácter.

Tal es el caso de los delitos sexuales que se producen contra menores, los cuales muchas veces no van a dejar otra huella, ni otra oportunidad de abordaje criminalístico, que el recuerdo del niño, aún cuando las sinuosidades psicológicas propias de las edades tempranas de la vida hagan difícil su interpretación. Incluso en determinados casos donde existen algunos elementos objetivos o testificales que demuestran la ocurrencia del delito contra el menor, la exploración de su testimonio permitirá complementar a estos en aspectos tales como, el *modus operandi*, lugar, circunstancias, o presiones psicológicas.

La importancia del testimonio de la víctima de abuso sexual, por mencionar aquellos de mayor incidencia, en el estudio criminológico radica que es la única fuente para poder obtener algunas variables de interés del grupo delictivo, además de ser una de las vías para establecer si estamos en presencia de una víctima real o falsa.

Las principales deficiencias investigativas, de acuerdo a las valoraciones realizadas por especialistas en distintos escenarios, recaen hoy en lo siguiente:

- Falta de profundidad, multilateralidad y objetividad en la investigación de estos ilícitos, ocasionada por la falta de preparación de los



actuales para enfrentar estos hechos, lo que motiva:

- Demora en radicar la denuncia por el desconocimiento sobre la calificación legal del hecho, con trascendencia a la competencia.
- Declaración del denunciante omisa y poco profunda, lo que impide la realización correcta y oportuna del llamado “primer ataque”.
- No se practican diligencias y acciones de instrucción necesarias para la probanza del hecho (ILH, declaración de testigos de presenciales y de referencia, experimentos de instrucción).
- En ocasiones no se realiza el reconocimiento médico legal del menor.
- Generalmente se omite el examen físico del acusado.
- Investigaciones complementarias formales y poco profundas.
- No se explotan las posibilidades que ofrece la criminalística (peritajes de odorología, biológicos, grafológicos, etcétera)
- No se acompaña evaluación del centro estudiantil sobre el explorado (cuando se trata de niños en edad escolar y adolescentes) sobre los cambios de conducta y actitud, posibles variaciones en los resultados académicos, etcétera)
- Dilación innecesaria en la tramitación del proceso, especialmente en la realización de la exploración del menor.
- Confusión entre el examen exploratorio del menor y la validación del testimonio.
- Falta de preparación previa para la realización de la exploración del menor.

En cuanto a la investigación debemos añadir también que pueden obstaculizar la obtención del testimonio de un infante la presencia del representante legal en el momento que se toman las declaraciones, ya que puede producir una distorsión descriptiva, cuando el menor trate de evitar la comunicación de situaciones que pueden acarrearle sensación de culpa o temor al castigo, lo que desde su posición puede subjetivamente equipararse a situaciones previstas para los casos en los que

el declarante es un adulto.

Con respecto a la declaración de la víctima se debe coordinar el trabajo con la policía, de tal manera, que si ésta efectúa la denuncia, en el parte policial se consignen las circunstancias del hecho, pero que no proceda este órgano a tomar una declaración adicional a la víctima, reservándola para que la diligencia se efectúe en presencia del fiscal, aunque no sea un requisito sine qua non, o ser entrevistado exclusivamente por los especialistas quienes brindarán su informe o su criterio de utilidad o no para el Proceso Penal

Por su parte son varias las posibles tareas periciales a cumplir en la víctima, con las diligencias periciales y en menor o mayor grado, resulta imprescindible el enfoque interdisciplinario, ese al que se encaminan los esfuerzos y así evitar reiterados exámenes que agudicen los efectos del acto. En este estilo de trabajo, las tareas periciales propiamente psicopatológicas a cumplir en la víctima serán las siguientes:

1. Estado mental de la víctima en el momento del hecho delictivo: De especial interés en determinados delitos, los cuales incluso pueden ser tipificados todo en base a ese elemento. Resulta de especial importancia en delitos como la Violación, Pederastia con Violencia y Abusos lascivos.
2. Estado mental de la víctima con posterioridad al hecho delictivo. A determinar en delitos en los que se prevé la posibilidad de – secuelas psíquicas, como delito de lesiones y la violación, o – enfermedad grave derivadas del hecho.
3. Validación del testimonio en víctimas de delitos.

Cada una de estas tareas está determinada por requerimientos judiciales específicos dentro del proceso penal concreto. Toda demanda de pericia proveniente del sistema se origina mediante una solicitud formal al perito para que, en virtud de sus especiales conocimientos, pueda intentar aclarar o aportar sobre algún punto materia de controversia o litigio.

¿Qué es la Validación del testimonio en víctimas de delitos?

- Procedimiento pericial médico-legal.
- No hay que realizarla en todos los casos, solo en los que resulte dudoso algún aspecto de la exploración.
- No se hace inmediatamente después de la denuncia, pero sí lo más cercano posible a la exploración.
- Su objetivo es analizar el contenido del testimonio infantil, para lo cual pueden emplearse maniobras de comprobación y explicar aparentes irregularidades.
- Califica lo que el menor describe, pero nunca si es veraz o no, tan solo confiable o útil para el proceso.

Empero los informes sobre validación de testimonios de los menores víctimas pueden resultar solicitudes omisas, donde no se concreta lo que se quiere obtener del peritaje o dejar de comprender elementos esenciales, tampoco aportar para este momento la exploración que se le tomó con anterioridad al menor, sino una síntesis de los hechos, con un valor incalculable, es una herramienta directa con que cuenta el perito a la hora de realizar su trabajo. Así mismo en la síntesis de los hechos se requiere mencionar el lugar donde fueron ejecutados los hechos, la fecha, edad del menor y el acusado, y relaciones que unen a víctimas y victimarios, aspectos que determinan la calidad del informe y dan muestra de la confianza del actuante en resultado al que aspira con su búsqueda.

En el caso de solicitarse el análisis pericial o validación del testimonio de niñas, niños o adolescentes de menos de 16 años de edad, será también imprescindible la remisión escrita del contenido de su exploración y los puntos de duda que explican la solicitud de esa pericia (Ídem). No debemos olvidar que, el origen de esta consulta que se hace desde el mundo jurídico al psicológico, se encuentra asentada en la necesidad tanto del fiscal como del juez, de valorar aspectos que no son estrictamente jurídicos.

Debemos valorar en su justa medida que por la naturaleza y principios del proceso judicial, el informe y sus conclusiones no son vinculantes a la decisión que va a tomar el tribunal colegiado, que se erige en perito superior. La fuerza

probatoria será estimada por los jueces teniendo en cuenta la competencia de los peritos, la unidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos o técnicos en que se fundan, y la concordancia de su aplicación con las reglas de *su sana crítica*.

El informe pericial psicológico tiene que estar debidamente fundamentado y, carecerá de *eficacia probatoria* si no fuese claro y sus explicaciones aparecieran contradictorias o deficientes. En este punto podemos plantear que es necesario que un informe pericial se *baste a sí mismo*, es decir, contenga en su cuerpo todos los elementos de juicio suficientes para que sus conclusiones sean el resultado natural y esperado de su desarrollo (Ídem).

La evaluación pericial psicológica de la credibilidad del testimonio, y más específicamente el interés judicial por determinar la credibilidad de una declaración en el marco de una investigación criminal, se remonta a comienzos de siglo pasado. Un claro ejemplo de ello es que, de acuerdo a Steller y Köehnken, “en los años 30 aparecieron por primera vez en la literatura alemana psicológica y judicial los criterios de realidad” (Ídem).

Cuándo debe solicitarse la Validación.

- Cuando el Instructor o Fiscal dudan de la confiabilidad del testimonio.
- Cuando existen contradicciones en el propio testimonio del menor.
- Cuando hay indicios de inducciones en el mismo.
- Cuando no es lógico o coherente.
- Cuando aparecen elementos fantásticos.
- Cuando el afecto es contrario a lo que narra el menor.
- Cuando utiliza un lenguaje propio del adulto y reacomodos en su narración.
- Cuando no es espontáneo y fluido.
- A veces es el único elemento que existe para fundamentar el delito.

Admitir que el testimonio del niño carece totalmente de valor, significa dejar sin protección a los mismos con relación a su victimización en abusos sexuales, es una absurda manera de hacerlos responsables de su desgracia e incapaces

de defenderse, puede haber ausencia de elementos demostrativos del delito, ya sea porque no suelen producirse en muchos de ellos huellas identificables en los exámenes médicos legales y criminalísticos, o porque el delincuente los ejecuta en ausencia de testigos que harán materialmente imposible su probanza en nuestro medio. Conocedor de todo ello, el acusado dará un testimonio que se caracterizará, en la mayoría de los casos, por la negación confiada de los hechos que se le imputan e incluso por exacerbar rasgos de la conducta de niño o de la familia en su cuidado y educación.

La mayor parte de los infantes víctimas provienen de hogares disfuncionales, promiscuos, deformantes. Restar credibilidad al testimonio del niño(a) argumentando que su medio es anormal, inductor, interesado en el lucro, resulta contradictorio. Comparar la buena trayectoria social, impecable incluso, como aval a favor del acusado, opuesta a la procedencia de un medio más rechazable de la víctima, cuando en el proceso de cálculo del autor tal gradiente pudo ser decisivo para que pasara el acto delictivo, por sentirse poseedor de una fiabilidad social más ventajosa, resultaría absurdo.

Razonar que porque un niño(a) sea mentiroso habitualmente, miente también al razonar sobre el hecho delictivo que fue objeto, pudiera calificarse de absurdo, cuando se razona que precisamente es más seleccionable que cualquier otro para ser victimizado, por esa misma razón garantizadora de impunidad y también reflejo de condiciones psicosociales favorecedoras de la victimización.

Todos estos niños se examinan mediante un control semántico discutido en equipo para llegar a conclusiones uniformes en cuanto a validación de testimonio y conducta a seguir, obteniendo como resultado la clasificación del testimonio en tres tipos: **testimonio confiable** cuando las declaraciones del menor no presenten contradicciones, la narración es coherente y con el estado afectivo que corresponde a este hecho, coincidieron la víctima y el victimario en el lugar y el tiempo en que se desencadenan los hechos, tiene valor judicial; **testimonio dudoso** si han existido contradicciones en las declaraciones que no permiten pensar con ni-

tidez los hechos acaecidos, presenta contradicciones esenciales en el fondo del testimonio el cual es real, pero presenta determinados adornos que denotan influencien el niño y **testimonio no confiable** ya que los elementos que se manifiestan en las declaraciones y los hechos no se corresponden con la posibilidad real de estos ocurre en el tiempo y espacio que se describe, no significa que no ocurrió el hecho sino que su testimonio no puede ser o no tiene valor judicial.

La Instrucción No. 173 del 7 de mayo de 2003, se pronuncia por la participación del menor víctima en el juicio solo si es imprescindible atendiendo al: “interés superior del niño”.

La revisión de los estudios empíricos actualizados con relación a la temática de las capacidades testificales infantiles, permite concluir que es posible obtener testimonios por parte de los niños(as) que sean concordantes con los hechos vivenciados (Instrucción No. 173/03). Los niños presentan mayores capacidades para testificar de lo que el sentido común podría suponer hasta ahora y que más bien, el supuesto general se basa en prejuicios poco fundamentados empíricamente. Esto puede resultar riesgoso, si los agentes administradores de justicia se basan en prejuicios más que en evidencias al valorar la credibilidad del relato del niño(a). Por ello no debe resultarnos suficiente aplicar y transmitir una adecuada técnica jurídica, se requiere lograr convicción para transmitir certeza.

## CONCLUSIONES

Los infantes sufren el hecho de ser cuestionados al describir el hecho en el que fueron víctimas de delitos sexuales y en un significativo número de oportunidades su testimonio es el medio de prueba fundamental con el que contamos para demostrar su existencia.

La protección de los derechos de los(as) niño(a)s durante la investigación de delitos sexuales, requieren un elevado nivel de profesionalidad de los fiscales para lograr efectividad en el ejercicio de la acción penal y aún subsisten deficiencias que demandan de una constante preparación y perfeccionamiento de los procedimientos.



## BIBLIOGRAFÍA

- Constitución de la República de Cuba*. 1992. Editora Política, La Habana, Cuba.
- Crespo Barrios, Ana Ivis e Iván Cruz Álvarez Cantos. 1999. *Maltrato en la Adolescencia. Manual de prácticas clínicas para la atención integral a la salud del adolescente*. MINSAP, La Habana, Cuba.
- Diccionario ilustrado de la lengua española* ARISTOS. 1985. Editorial científico técnica.
- Evaluación Pericial Psicológica de Credibilidad de Testimonio*. 2008. Documento de Trabajo interinstitucional. Santiago de Chile, Chile.
- Gómez Pérez, Ángela. Ponencia "Aspectos puntuales acerca de la victimología". Departamento Ciencias Penales. Instrucción No. 173/03, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.
- Instrumentos Jurídicos Para la Infancia*. 1996. Convención Internacional de los Derechos del Niño. Editorial La Primera Prueba C. A UNICEF, Venezuela.
- Ley No. 1289, Código de Familia. 1989. Universidad de La Habana, Cuba.
- Ley No. 59, Código Civil. 1998. Ministerio de Justicia, La Habana, Cuba.
- Ley No. 87, Código Penal anotado y concordado con Instrucciones y sentencias del Tribunal Supremo Popular. 1998. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba.
- Presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Situación General de la Niñez en México y Centroamérica. Por Bruce Harris. Director Regional para América Latina de Casa Alianza. 11 de octubre del 2000. Tomado de Internet.
- Rodríguez Manzanera, Luis. 1996. *Victimología y Derechos Humanos*. Editorial del Puerto, Buenos Aires, Argentina.
- Roque, Juan Carlos. 20-6-2001. *Nuevos enfoques en la formación de los niños. A iniciativas de 18 premios novel de la paz, la ONU ha presentado en Viena, Austria, la "Década internacional para una cultura de paz y renuncia a la violencia para los niños del mundo"*. Radio Nederland. Tomado de Internet.

# LA ALTA INCIDENCIA DEL DELITO DE LESIONES EN LA PROVINCIA DE CIEGO DE ÁVILA



**LIC. LAY TRUJILLO GONZÁLEZ**  
FISCAL JEFA  
FISCALÍA PROVINCIAL DE CIEGO DE ÁVILA



**LIC. IVELISSE DE LA C. PÉREZ UNZÚE**  
FISCAL  
FISCALÍA MUNICIPAL DE MANAGUA

En nuestro país existe un marcado antecedente de violencia que tuvo lugar durante la etapa neocolonial donde resultaron asesinados y masacrados miles de personas, junto al agravamiento de la situación económica existente en esa época se agudizaron los problemas sociales, factores determinantes en el crecimiento de la actividad delictiva.

La falta de trabajo y el deficiente nivel educacional afectaban fundamentalmente a la juventud los que fueron factores determinantes en el alto índice de delincuencia juvenil. El juego, la prostitución, el vicio y la discriminación racial, también caracterizaban el panorama social.

En los primeros años de la Revolución, entre los años 1959 y 1962 existió un incremento de la persecución de la actividad delictiva, que alcanza sus niveles históricos

más altos hasta ese momento, influido por la denuncia y la radicación de miles de hechos violentos cometidos durante la tiranía batistiana y la actividad contrarrevolucionaria.

En la actualidad ha existido un incremento en los delitos violentos, específicamente los delitos que afectan la vida y la integridad corporal de las personas, dentro de los mismos y con mayor incidencia la tipicidad de Lesiones.

Asimismo, este incremento se encuentra aparejado de la utilización de disímiles medios o armas que denotan el incremento de la peligrosidad social en su ocurrencia, siendo afectado no solo la víctima, sino la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la cohesión de la comunidad y los principios revolucionarios que regulan el desarrollo coherente y armónico de nuestra sociedad. Por lo que existe una necesidad de evaluar cómo

disminuir la alta incidencia del delito de lesiones en la provincia de Ciego de Ávila.

## DESARROLLO

El término de Lesiones según lo preceptuado en el Diccionario Cervantes, Manual de Lengua Española, la palabra lesión significa “ocasionar herida, daño o detrimento”, siendo evaluado a tales efectos herir como “romper las carnes de un ser viviente con arma o instrumento análogo, batir un cuerpo contra otro” (S/A: 455).

La evaluación del delito de Lesiones evidencia en sí mismo un alto grado de complejidad al ser vinculante, para su tipificación, del tratamiento desde el punto de vista médico y técnico jurídico, así como poseer incidencia en su ocurrencia por una alta variedad de medios y formas de ejecución, lo que según se establece en el Libro de texto de Colecti-



vo de Autores, Una visión desde la dogmática a figuras del Código Penal cubano, podrán ser “infinitos en número y de extraordinaria variación por su forma y acción” (S/A: 123).

Nuestro Código Penal vigente, Ley 62 de 1987 establece diferencias entre estos tipos penales desglosadas en el objetivo, la estructura y la sanción en correspondencia a la gravedad de los hechos y el carácter de las lesiones provocadas por el agente comisor.

Este tipo penal es regulado en el Artículo 272 del referido cuerpo legal, en el que se define conceptualmente las Lesiones de carácter Grave y una regla especial de la adecuación en la que establecen como elementos a tener en cuenta para la imposición de la pena, la interrelación existente entre la intensidad del culpable en la ejecución del hecho delictivo, conjuntamente con la entidad de las lesiones causadas.

El segundo tipo, regulado en el artículo 273, regula tres valores nucleares, al definir que “el que”, ciego, castrado o inútil, teniendo en cuenta a tales efectos que cegar está referido a la pérdida de visión en uno o los dos ojos, evaluado en este caso que deberá ser total, pues de lo contrario se subsumirá en la figura delictiva anterior, en el supuesto de castrar este verbo es sinónimo de hacer impropio para la reproducción, incluyendo allí a las personas de ambos sexos, generalizando de este modo una conducta que podría originar una afectación para la totalidad de las personas al impedirle pro-

crear, diferenciándose del resto de los Cuerpos Legales, en lo que a pesar de ser regulado este comportamiento solo se identificaban como sujetos pasivos, a las personas del sexo masculino.

El tercer tipo penal, puede ser considerado como atentado, de las regulaciones establecidas en el artículo 274, teniendo implícitos los verbos causar y dañar mediante las lesiones corporales a otro o el daño de su salud, estableciendo como requisito, que se requiera para su curación de “tratamiento médico” y como aspectos diferenciadores, de modo negativo, que no pongan en peligro la vida de la víctima ni le dejen las secuelas establecidas en los artículos 272 y 273.

La prevención ha sido un tema de gran repercusión mundial siendo abordado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), de forma tal que se desarrolló un programa conocido como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se destaca que una de las dimensiones del desarrollo es precisamente el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente.

Constituyendo la labor de prevención del Estado una acción fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad, independientemente de la formación económico social de que se trate, que trasciende al marco jurídico penal para convertirse en una actividad intersectorial con incidencia en todos los factores de la comunidad.

Entendiéndose etimológica-

mente a la Prevención: como proveniente del latín *prae-ventio*, que indica la acción o efecto de prevenir, preparar, conocer, disponer, organizar, prever, impedir o vencer un riesgo, inconveniente o dificultad.

En nuestro caso el Estado Cubano, dedica grandes esfuerzos en el trabajo preventivo, incluso desde edades tempranas, cuando comienzan a manifestarse las condiciones propicias para que prolifere el germen de la delincuencia, como pueden ser la inasistencia reiterada a la escuela, incumplimientos de los deberes escolares, mala actitud en el centro docente, etc.

Para ello se conformó el Centro de Educación, Análisis y Orientación a Menores, encargado de evaluar las conductas del menor desde diversos campos, seguido por la implantación en el año 1982 del Decreto Ley 64 que organiza el sistema para la atención a menores con trastorno de conducta, prevención y tratamiento a menores proclives o que hayan cometido delito, así como de las manifestaciones antisociales.

Otro de los medios a tener en cuenta para prevenir las transgresiones de la Ley es reeducar al delincuente, el fin retributivo de la sanción tiene alcance limitado al perseguir en modo fundamental el castigo al delincuente, lo que no disminuye la posibilidad de que reincida en su conducta, circunstancia por la que la prevención no podrá verse deslindada del tratamiento al transgresor, es



decir a la persona que en varias ocasiones ha violado el ordenamiento penal.

La prevención es necesaria de modo permanente en la sociedad. Antes de la ocurrencia de un hecho delictivo es decisiva la labor que realizan las Comisiones de Prevención y Atención Social, que fueron creadas a través del Decreto Ley 95 de fecha 29 de agosto de 1986 y que actualmente se encuentran rectoradas por el Decreto Ley 242 del Sistema de Prevención y Atención Social de fecha 13 de marzo de 2007, que lo define en su artículo 1 como un centro de coordinación de los esfuerzos de las instituciones que lo integran para lograr los objetivos que se proponen sin suplantarse las facultades y atribuciones de aquellas<sup>1</sup>.

El papel protagónico de esta actividad se ha desarrollado por el sistema educacional y las organizaciones e instituciones que lo conforman, ejerciendo su labor como una manera de aglutinar toda la fuerza de educadores en aras de lograr la formación y aprendizaje sobre la base de los principios de la sociedad.

Juega un papel fundamental la Organización de Pioneros José Martí en la que se analizan cada una de las conductas que pudiesen denotar desviaciones sociales, manteniendo un seguimiento permanente con las ausencias a los Centros Educativos, así como la creación de las Escuelas de Conducta y Consejo de Atención a Menores que posibilita la atención, control y reinser-

ción al medio, a aquellos menores que poseen una conducta desajustada.

Entre las organizaciones vanguardias que desarrollan esta actividad se encuentra la Unión de Jóvenes Comunistas y dentro de ella los Trabajadores Sociales, pilares esenciales en la política social desarrollada por el país como un medio de controlar las desviaciones conductuales de la sociedad, los Comité de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas.

Los Tribunales Populares ejercitan su labor, teniendo en cuenta su misión fundamental de ejercer la administración de justicia y por ende la educación de los ciudadanos en el cumplimiento de la Ley, contribuyendo a la eliminación de la impunidad de hechos delictivos y lograr la estabilidad ciudadana y el desarrollo sostenible de la comunidad.

Por otra parte la Fiscalía General de la República, que es la Institución del Estado encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad, y de ejercitar la acción penal pública, juega un papel importante en este control, determinando las causas y condiciones que originaron las violaciones de la Ley y la adopción de las medidas necesarias encaminadas a erradicar las mismas.

El Ministerio del Interior posee un grupo de Órganos distribuidos con el objetivo de mantener el orden interior y la tranquilidad ciudadana, desglosando esta actividad desde la prevención a través de los Jefes de Sector en la Comuni-

dad y el Consejo de Atención a Menores, para aquellos casos con desajustada conducta.

El Ministerio de Justicia realiza una importante labor que se refleja en el valor del jurista como la persona que incide en la orientación de la población en la búsqueda de soluciones adecuadas, análisis y evaluación de la legislación, su tratamiento y búsqueda de los agentes criminógenos.

Por otra parte, los Órganos de la Administración Central del Estado (OACE) desde su creación a los diferentes niveles ha mantenido una participación activa en lograr desarrollar una Política social en correspondencia a los Principios y Normas que rigen la sociedad incidiendo de este modo en la Política Criminal que se adopte.

Por tanto en vistas a las dificultades anteriormente descritas resulta imprescindible trazar un plan de acción, encaminado a lograr disminuir los delitos violentos en la sociedad y su enfrentamiento:

1. Realizar jornadas de trabajo entre los órganos que integran el Sistema de Prevención y Atención Social a fin de crear un mecanismo de interrelación y colaboración en el trabajo preventivo de la actividad delictiva.
2. Efectuar jornadas de trabajo entre los Instructores, Jefes de sector, los Fiscales de Procesos Penales, sobre la incidencia del delito de Lesiones y las principales causas que lo provocan, teniendo en cuenta que el Jefe



de Sector es el agente de la autoridad que se encuentra en las comunidades, para poder ejercer una efectiva labor profiláctica en la demarcación que atiende.

3. Realizar por parte del Fiscal de Procesos Penales una evaluación de la aplicación de las sanciones a este tipo de delito donde inciden actos violentos, teniendo en cuenta que en ocasiones origina que se valore como inadecuado el marco penal establecido.

4. Coordinar por parte de la Comisión de Prevención y Atención Social con el Sistema Educativo para realizar conversatorios de carácter profiláctico en las Secundarias Básicas y Preuniversitarios del municipio, donde participe el Fiscal de Procesos Penales.

misiones de Prevención y Atención Social no establece los mecanismos de interrelación y colaboración de los órganos y organismos encargados de su realización, dejando su ejecución de modo expedito.

2. No existe una formulación de los métodos a aplicar para involucrar y organizar la sociedad conjuntamente con los órganos que conforman el control social en el enfrentamiento al delito.

## CONCLUSIONES

1. La legislación que prevé la conformación e institucionalización de las Co-

## BIBLIOGRAFÍA

- Colectivo de Autores. S/A. *Una visión desde la dogmática a figuras del Código Penal cubano*, dirigido y coordinado por la Dra. Mayda Goite Pierre. Editado en colaboración con el Instituto de Criminología de la Universidad de Oslo, Noruega.
- Decreto Ley No. 242 del 2007
- Diccionario Cervantes, Manual de Lengua Española*. S/A. Tercera Edición. Instituto Cubano del Libro, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba.
- Ley No. 62, Código Penal. 1987

## NOTAS

- <sup>1</sup> El Decreto Ley 242 del 2007 en su artículo 2 establece los objetivos del Sistema de Prevención y Atención Social, los que están dirigidos en sentido general a desarrollar el trabajo de prevención y atención social de forma directa, organizada y planificada sobre aquellas personas que sí lo requieran, propiciar la unidad de acción en la prevención del delito y las demás conductas antisociales, identificando las causas y condiciones que las generan, proponer la interrelación con el Programa de los Trabajadores Sociales en las actividades del sistema, contribuir a la disminución de las conductas transgresoras de la convivencia social en correspondencia con las atribuciones y funciones de cada una de las instituciones que lo integran, coadyuvar a la educación y rehabilitación de los que incurran en conductas antisociales y delictivas, propiciar la participación de la población en las tareas de prevención y atención social y cooperar con las instituciones que desarrollan el enfrentamiento a las actividades antisociales y delictivas, promover estudios e investigaciones científicas con vistas a identificar las causas y condiciones que influyen en la existencia de conductas antisociales y delictivas, coordinar y evaluar estrategias de divulgación que apoyen el trabajo de prevención y atención social, promover una política de incorporación o reincorporación a personas aptas que se encuentran desvinculadas del estudio o el trabajo, en particular con los proclives a infringir el orden social, priorizando a los jóvenes y propiciar que por parte de los organismos y organizaciones se ejecuten actividades culturales, deportivas, recreativas y otras, dirigidas al sano empleo del tiempo libre.



# CONVOCATORIA

## XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2016 Y PRIMER EVENTO LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD

**L**a Fiscalía General de la República de Cuba convoca al XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, que tendrá lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, del 23 al 25 de marzo de 2016.

El encuentro se realizará con el auspicio del Tribunal Supremo Popular, el Ministerio de Justicia, la Unión de Juristas de Cuba, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

Como objetivo principal, nos proponemos realizar intercambios entre colegas de diferentes materias y países, para compartir experiencias y conocimientos que tienen expresión en la vida cotidiana, relacionados con el Derecho Penal y su vinculación con la Protección Jurídica de todos los ciudadanos, especialmente de las mujeres, menores de edad y otros que lo necesiten.

El evento va dirigido fundamentalmente a fiscales, procuradores, abogados, jueces, policías, penitenciaristas, criminalistas, criminólogos, victimólogos, médicos legales, psiquiatras forenses, funcionarios que atienden menores víctimas y con trastornos de conducta, psicólogos, sociólogos, contralores, auditores, economistas, asesores jurídicos, profesores y estudiantes universitarios, entre otros especialistas interesados en la materia.

**PALACIO DE CONVENCIONES DE LA HABANA**  
**Del 23 al 25 de marzo de 2016**



# TEMÁTICAS CONVOCADAS

## TEMAS PENALES

- La prevención y enfrentamiento al tráfico ilegal de drogas y de migrantes. La trata de personas.
- Delitos económicos y funcionariales.
- Delincuencia transnacional y el cibercrimen.
- Terrorismo.
- Lavado de activos.
- Delito ambiental.
- Tráfico Ilegal de Menores.
- Tráfico de órganos de Menores.
- Explotación sexual de Menores.
- La ejecución de la pena en las personas privadas de libertad.
- La persona jurídica como sujeto del Derecho Penal. Retos actuales y futuros.
- El papel del Fiscal en la legitimación de la detención.
- La fase preparatoria en el proceso penal. Prueba y nuevas tecnologías.
- Efectividad y profesionalidad del Fiscal en el acto del juicio oral.

## RETOS FRENTE A LA CORRUPCIÓN

- El Estado, la Sociedad y el Derecho en la lucha contra la Corrupción.
- Política económica y desarrollo institucional como elementos esenciales para enfrentar la Corrupción.
- El fortalecimiento del papel de control del Estado como garantía para mejorar la gestión pública, prevenir y aminorar las manifestaciones de Corrupción.
- Tratamiento legislativo de la lucha contra la Corrupción.
- Desarrollo contemporáneo del Derecho en cuanto al enfrentamiento a la Corrupción.
- El Ministerio Público y el Sistema Judicial en el enfrentamiento a la Corrupción.
- Los Organismos Internacionales y las relaciones intergubernamentales en la lucha contra la Corrupción.

## TEMAS DE FAMILIA, MENORES Y OTRAS TEMÁTICAS

- Protección y atención a la violencia en el seno de la familia.
- Delitos relacionados con los niños y las niñas. Necesidad de protección integral de los menores de edad.
- Papel de la Fiscalía en la protección de los derechos del menor.
- Aseguramiento procesal de los derechos del menor.
- Explotación Laboral del menor.
- Violencia intrafamiliar y de género.
- Relaciones paterno filiales y función tutelar del Estado.
- Tutela Penológica de niños y niñas.
- Protección al menor con trastornos de la conducta.
- Leyes Migratorias y Minoridad.
- El control de la legalidad como garantía de la seguridad jurídica de la ciudadanía.
- El derecho de quejas y peticiones.

## PROGRAMA GENERAL PRELIMINAR

**Martes 22 de marzo:** Acreditación / Curso Pre-Encuentro “Corrupción y delitos Económicos”, para delegados nacionales.

**Miércoles 23 al viernes 25 de marzo:** Sesiones Plenarias del encuentro Internacional.

**Fecha de entrega de los trabajos:** Hasta el 31 de enero de 2016.

## ALOJAMIENTO Y RESERVAS

Ventas Internacionales del Palacio de Convenciones, le ofrece un paquete especialmente confeccionado para el evento, donde se le incluye: cuota de inscripción y registro al Evento; alojamiento en el hotel sede u otro similar con desayuno tipo buffet y asistencia personalizada.

Los interesados pueden contactar a:

LIC. WILMA MADAMS JIMÉNEZ  
Esp. Comercial Ventas Internacionales  
del Palacio de Convenciones de La Habana.  
e.mail: wilmamj@palco.cu  
Tel: (537) 208 4398 [www.eventospalco.com](http://www.eventospalco.com)

## CUOTA DE INSCRIPCIÓN EN CUC:

230.00 delegado / 200.00 ponente  
150.00 estudiante / 100.00 acompañante

Para mayor información comunicarse con:

MSC. PATRICIA MARÍA RIZO CABRERA  
Coordinadora Comité Organizador  
Teléfono: (537) 206- 61-22  
E-mail: [relaciones@5ta.fgr.cu](mailto:relaciones@5ta.fgr.cu)

MSC. FERNANDO RODRÍGUEZ INFANTE  
Coordinador Comité Organizador  
Teléfono: (537) 206 90-78

LIC. MIGDALIA LUNA CISNEROS  
OPC. Palacio de Convenciones de la Habana  
Teléfono: 537 208 6176  
E-mail: [Migdalia@palco.cu](mailto:Migdalia@palco.cu)



## BENEFICIOS PENITENCIARIOS

Varios ciudadanos se han dirigido a la Fiscalía General de la República para conocer los beneficios penitenciarios que implican libertad anticipada. Al respecto, el Fiscal responde que los beneficios penitenciarios que implican libertad anticipada son:

**La libertad condicional:** la cual no es un derecho sino un beneficio que puede ser concedido únicamente al sancionado a privación de libertad, a propuesta del consejo de dirección del centro o por solicitud de los familiares de este, cuando las características individuales y su comportamiento, durante el tiempo de reclusión, demuestren que existen razones fundadas para considerar que el fin de la punición se ha alcanzado, sin necesidad de ejecutarse totalmente la sanción, siempre que haya extinguido por lo menos:

- a) la tercera parte de la sanción impuesta, cuando se trate de sancionados (primarios) que no hayan arribado a los 20 años de edad al comenzar a cumplir la sanción;
- b) la mitad del término de la sanción impuesta, cuando se trate de sancionados primarios;
- c) las dos terceras partes de la sanción impuesta, cuando se trate de reincidentes o multirreincidentes.

Quedan excluidos de este beneficio los sancionados a Trabajo Correccional Con Internamiento y los que cumplen medida de seguridad de internamiento por conducta antisocial. El Auto del Tribunal, resolución judicial que resuelve la solicitud de otorgamiento de este beneficio, puede ser recurrido dentro del término de las 72 horas a partir de su notificación.

**Sustitución de la sanción privativa de libertad por las de Trabajo Correccional Sin Internamiento y Limitación de Libertad (según el artículo 30.13 del Código Penal):** Al igual que la libertad



condicional no es un derecho sino un beneficio, concedido solo a los internos que extinguen sanción de privación de libertad hasta 5 años, a propuesta del consejo de dirección del centro, teniendo en cuenta la índole del delito y sus circunstancias, la connotación social del hecho, el comportamiento del sancionado en el establecimiento penitenciario, así como sus características personales, siempre que haya extinguido, al menos como regla:

- a) la tercera parte de la sanción impuesta cuando se trate de sancionados primarios,
- b) la mitad de la sanción impuesta cuando se trate de un reincidente
- c) las dos terceras partes si es un multirreincidente

**Suspensión de la sanción de Trabajo Correccional Con Internamiento:** Tampoco es un derecho, puede ser otorgado por el Tribunal, previa solicitud de los órganos competentes del Ministerio del Interior, si el sancionado cumple satisfactoriamente con sus obligaciones en cualquier momento. En la práctica se requiere que por lo menos el interno haya extinguido un tercio de la sanción, que permita evaluar de manera razonable el cumplimiento satisfactorio de sus obligaciones.

**Suspensión de la sanción de la medida de seguridad predelictiva de internamiento en un establecimiento especializado de trabajo o de estudio:** Puede disponerse por el Tribunal, a instancia del órgano encargado de su ejecución o de oficio, para lo que tendrá en cuenta el informe de evaluación de conducta que presente el órgano ejecutor, lo que podrá realizarse en cualquier momento. También requiere que por lo menos el interno haya extinguido un tercio de la sanción que permita evaluar la evolución de su conducta con objetividad.

## OTORGAMIENTO DE UNA LICENCIA EXTRAPENAL

Juan José, ciudadano residente en la provincia de Santiago de Cuba, desea conocer si su hermano, que se encuentra recluso en un establecimiento penitenciario de esa provincia, puede ser destinatario de una Licencia Extrapenal. Al respecto, el Fiscal refiere que el Tribunal puede conceder una licencia extrapenal a un interno de un establecimiento o centro penitenciario por causas justificadas, sea el motivo una enfermedad o presentar limitaciones físicas motoras que dificulten sustancialmente o impidan su permanencia en el establecimiento penitenciario, entre otras. Previamente se debe realizar una solicitud del órgano encargado de la ejecución de la sanción o familiares del interno durante el tiempo que se considere necesario. También puede concederla el Ministro del Interior por motivos extraordinarios.

# ¿SABÍAS QUE?

## ¿QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN?

La Constitución es la Ley Suprema de un Estado que establece su organización, su funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías de sus habitantes. Se llama precisamente Constitución pues “constituye” la nación políticamente organizada, le da sus principios, y la distingue de otros estados.

Este texto tiene dos grandes partes:

*Dogmática:* enumera los derechos y deberes reconocidos a los habitantes de un Estado, se refiere a los derechos humanos.

*Orgánica:* es la que regula la organización del Estado y del gobierno, establece por ejemplo cuáles son sus Órganos, la integración, qué cometidos tienen y cómo se relacionan entre sí.

## JERARQUÍAS NORMATIVAS

Existen diferentes jerarquías entre las normativas dependiendo de quiénes las aprueban. En Cuba, las principales y de mayor jerarquía son: La Constitución de la República, Las Leyes Ordinarias, Los Decretos- Leyes y los Decretos.

*Constitución de la república:* es la norma jurídica de máxima importancia y jerarquía. Es la Ley de leyes, Ley fundamental de la

otra. Estas incluían las Constituciones de Guáimaro, Baraguá, Jimaguayú y de la Yaya.

## CONSTITUCIÓN DE GUÁIMARO

Aprobada el 10 de abril de 1869, rigió en plena Guerra de los 10 años hasta el 8 de febrero de 1878. Esta Constitución contaba con 29 artículos destinados a fijar los Órganos esenciales del gobierno para el momento. Su valor esencial radicó en que consagró el derecho de todos los cubanos a la libertad y proclamó la abolición total y definitiva de la esclavitud.

## CONSTITUCIÓN DE BARAGUÁ

Se promulgó el 15 de marzo de 1878. Fue el resultado de la protesta realizada por el Mayor General Antonio Maceo Grajales. La misma estaba compuesta por 6 artículos, en los números 3 y 4 del texto constitucional se refrendaba jurídicamente la esencia de la Protesta de Baraguá.

## CONSTITUCIÓN DE JIMAGUAYÚ

Se puso en vigor el 16 de septiembre de 1895. En este texto se expresa que la revolución se hacía por la independencia y creación de Cuba en República Democrática y declaraba su Constitución como estado libre e independiente con gobierno propio.

## CONSTITUCIÓN DE LA YAYA

Se promulgó el 29 de octubre de 1897. Con 48 artículos, se distingue por la inclusión en su texto de una parte dogmática, donde se desarrollaba un título especial sobre los derechos individuales y políticos. En general, es una Constitución redactada

con mayor técnica, y en ella se percibe la influencia positiva de la Constitución de Guáimaro al desarrollar conceptos que en esta solo se esbozaban.

Luego de que Cuba se declarara una República, se redactaron diversas constituciones, culminando finalmente con la Constitución de 1976, la cual se encuentra vigente en nuestro país, con tres modificaciones posteriores.

En la Gaceta Oficial del 16 de julio de 2002 se publica la Ley de Reforma Constitucional, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la cual se refleja la decisión de la inmensa mayoría de nuestro pueblo: “El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en nuestra constitución, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo.”

Antes de aprobarse esta reforma constitucional, ya en nuestra Constitución se destacaba el carácter socialista de nuestro Estado, lo que puede apreciarse en los artículos 1, 9 y 14 de la Constitución.



# EN LA HISTORIA

## OCTUBRE

- **03/1965** Constitución del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (50 aniversario).
- **06/1976** Sabotaje terrorista a una nave aérea de Cubana de Aviación, en Barbados, por agentes de la CIA. Perecen 73 personas. El 6 de octubre de 2010, se instituyó el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado en recordación a las víctimas de este crimen.
- **08/1967** El Comandante Ernesto Guevara de la Serna es asesinado por el ejército boliviano.
- **10/1868** Inicio de la Guerra de Independencia con el alzamiento de La Demajagua por Carlos Manuel de Céspedes.
- **16/1953** Autodefensa de Fidel Castro en el juicio por los sucesos del Moncada. Se conoce dicho alegato como La Historia me absolverá.
- **20** Día de la Cultura Cubana.
- **22/1962** Inicio de la Crisis de Octubre o Crisis de los Misiles.
- **26/1959** Creación de las Milicias Nacionales Revolucionarias.
- **28/1959** Desaparición física del Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán.
- **31/1976** Se constituyen simultáneamente en todo el país las Asambleas del Poder Popular.

## NOVIEMBRE

- **04/1975** Inicia Operación Carlota en Angola (40 aniversario).
- **07/1917** Triunfo de la gran Revolución Socialista de Octubre.
- **16/1519** Se funda la Villa de San Cristóbal de La Habana, (496 aniversario).
- **25/1956** Salida del yate Granma desde México con los 82 expedicionarios, encabezados por Fidel Castro, que se enfrentarían a la tiranía batistiana, mediante la lucha armada.
- **30/1956** Levantamiento de Santiago de Cuba dirigido por Frank País García.

## DICIEMBRE

- **02/1956** Desembarco del Yate Granma en las Coloradas, Granma
- **03** Día de la Medicina Latinoamericana.
- **05** Día Nacional del Constructor.
- **07/1896** Caída en combate del Titán de Bronce, Antonio Maceo Grajales y su ayudante Panchito Gómez Toro
- **11/1898** Muere el General Mambí Calixto García
- **17/1975** Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba
- **22** Día del Educador
- **23/1973** Aniversario de la Fiscalía General de la República

**ENERO**

- **01/1959** Triunfo de la Revolución Cubana
- **05/1892** Aprueban creación del Partido Revolucionario Cubano
- **05/1959** Se crea la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)
- **08/1959** Entrada del Comandante Fidel Castro en La Habana
- **10/1929** Muere Julio Antonio Mella
- **11/1980** Muere Celia Sánchez Manduley
- **16/1934** Muere Rubén Martínez Villena
- **28/1853** Natalicio del Héroe Nacional José Martí

**FEBRERO**

- **06/1932** Nace Camilo Cienfuegos
- **10/1878** Pacto de El Zanjón
- **16/1959** Asume Fidel Castro el cargo de Primer Ministro
- **24/1895** Reinicio de la lucha por la independencia de Cuba
- **24/1958** Primera transmisión oficial de Radio Rebelde
- **25/1853** Muere Félix Varela en el exilio, en Estados Unidos
- **27/1874** Muere El Padre de la Patria

**MARZO**

- **02/1961** Embargo comercial a Cuba
- **05/1933** Muere el patriota cubano Juan Gualberto Gómez
- **08** Día Internacional de la Mujer
- **13/1956** Asalto al Palacio Presidencial y Toma de Radio Reloj
- **15/1878** Protesta de Baraguá
- **18/1923** Protesta de los Trece, encabezada por Rubén Martínez Villena
- **24/1957** Designado Camilo Cienfuegos jefe de la vanguardia
- **24/1959** Creación del ICAIC
- **25/1895** Manifiesto de Montecristi
- **25/1905** Nace Julio Antonio Mella en La Habana

# GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS

**ANTI JURIDICIDAD** (del alemán *Rechtswidrigkeit*, que significa "contrario al Derecho") es, en Derecho penal, uno de los elementos considerados por la teoría del delito para la configuración de un delito o falta. Se le define como aquel desvalor que posee un hecho típico que es contrario a las normas del Derecho en general, es decir, no solo al ordenamiento penal. La antijuridicidad supone que la conducta que se ha realizado está prohibida por el ordenamiento jurídico.


Tomado de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad>

**ACUERDO REPARATORIO:** en Derecho procesal se le conoce a un acuerdo entre el imputado por un delito o falta y la víctima, que pone fin al proceso penal. Se define como un medio autocompositivo de carácter judicial, bilateral, y no asistido, celebrado entre el imputado y la víctima, que requiere ser homologado por el juez de garantía y se celebran con el fin de convenir la reparación de las consecuencias causadas por el delito (repara el daño mediante indemnización) y pone término al litigio penal pendiente respecto de un delito que afecte bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistentes en lesiones menos graves o constituyentes de

delitos culposos. Dado el especial carácter del Derecho penal, que afecta a cuestiones de orden público y a bienes jurídicos esenciales, es necesario que el acuerdo reparatorio esté permitido por ley para que este pueda poner fin al proceso penal. Tomado de: [https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo\\_reparatorio](https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_reparatorio)

**Non bis in idem:** (del latín, No dos veces por lo mismo), también conocido como *autrefois acquit* ("ya perdonado" del francés) o *double jeopardy* ("doble riesgo" del inglés), es una defensa en procedimientos legales. En muchos países como los Estados Unidos, México, Argentina, Canadá, Perú, España, Colombia, Australia, República Dominicana e India es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, que prohíbe que un acusado sea enjuiciado dos veces por un mismo delito. En otro sentido, implica que no pueda valorarse dos veces un mismo hecho o fenómeno para calificar la tipicidad de un delito o evaluar la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Ante un tribunal un acusado además de declararse inocente o culpable puede manifestar que *autrefois acquit* (del francés: Ya he sido exculpado) si ya ha sido encontrado inocente en un juicio previo así como *autrefois convict* (del francés: Ya he sido condenado) si el acusado ya fue enjuiciado y condenado. Tomado de: [https://es.wikipedia.org/wiki/Non\\_bis\\_in\\_idem](https://es.wikipedia.org/wiki/Non_bis_in_idem)





## ¿CÓMO COLABORAR CON NUESTRA REVISTA?

El 14 de julio de 2015, la Fiscalía General de la República aprobó la Resolución No. 206, la cual modifica el Reglamento General para el funcionamiento de la Revista Legalidad, Derecho y Sociedad, publicación oficial de este Órgano.

En la misma, fiscales, abogados, jueces, penitenciaristas, criminalistas, criminólogos, victimólogos, médicos legales, psiquiatras forenses, funcionarios que atienden menores víctimas y con trastornos de conducta, psicólogos, sociólogos, contralores, auditores, economistas, asesores jurídicos, profesores, estudiantes universitarios, entre otros especialistas interesados en la materia pueden publicar sus trabajos, siempre que cumplan con los requisitos de contenido y forma que se establecen para la publicación.

Para ser publicadas en la Revista, los trabajos o ponencias deben referirse a temas de actualidad y que sean prioridad para la Fiscalía General o el país, así como poseer carácter científico-técnico, jurídico

y social. Sus contenidos deben contribuir al enriquecimiento de la cultura jurídica y preparación de los profesionales de este sector, de los ciudadanos y relacionarse con la actividad de la Fiscalía o de las diferentes ramas del Derecho.

Además, requieren cumplir con los requisitos de forma y normas de redacción siguientes:

- a. Ser presentados en la aplicación Word con letra Arial 12, escritos a espacio y medio.
- b. Deben tener una extensión máxima de 5 cuartillas (dentro de ellas deben estar incluidas las notas, gráficos, referencias bibliográficas y anexos).
- c. La bibliografía debe contener todos los datos necesarios para identificar la obra, siendo imprescindibles en el caso de los libros: nombre del texto, del autor (es), fecha de publicación, casa editorial y país; si es un material publicado en una revista debe contener el nombre del autor, de la publicación, fecha, volumen o número.
- d. El autor debe incluir su nombre y apellidos completos, el rango académico más elevado que posea, el órgano, organismo o institución a la que pertenezca y el cargo que ocupe. Asimismo, una foto tipo carné de identidad en formato digital, del autor o autores.
- e. De resultar imprescindible el empleo de abreviaturas o siglas en el texto, debe escribirse la primera vez su nom-

bre completo y a continuación las siglas entre paréntesis.

- f. Debido al carácter social de esta publicación las palabras empleadas deben ser de uso común o general. Cuando haya que incluir términos poco frecuentes (por estar en desuso o por ser excesivamente técnicos) es preciso explicar al lector su significado.
  - g. Es necesario explicar los conceptos y citar el contenido de las leyes, decretos, leyes, decretos, resoluciones u otras informaciones de esta naturaleza que se incluyan, para que sea de conocimiento del público general o no especializado.
  - h. Siempre debe citarse la fuente o procedencia de la información.
- Cuando un trabajo presentado para su publicación en la revista es aceptado, pero resulta necesario realizar modificaciones ortográficas, las mismas serán corregidas por el equipo editorial. Si son imprescindibles cambios en cuanto a contenido o amplitud de la ponencia, serán realizados por el autor, para lo cual se enviarán a la Dirección de Formación y Desarrollo de la Fiscalía General, la que estará encargada de contactar con los autores y comunicarles los cambios a realizar para ser publicados.

La versión digital de la revista podrá ser vista y descargada en PDF por números completos en el Portal Web del Órgano.

